

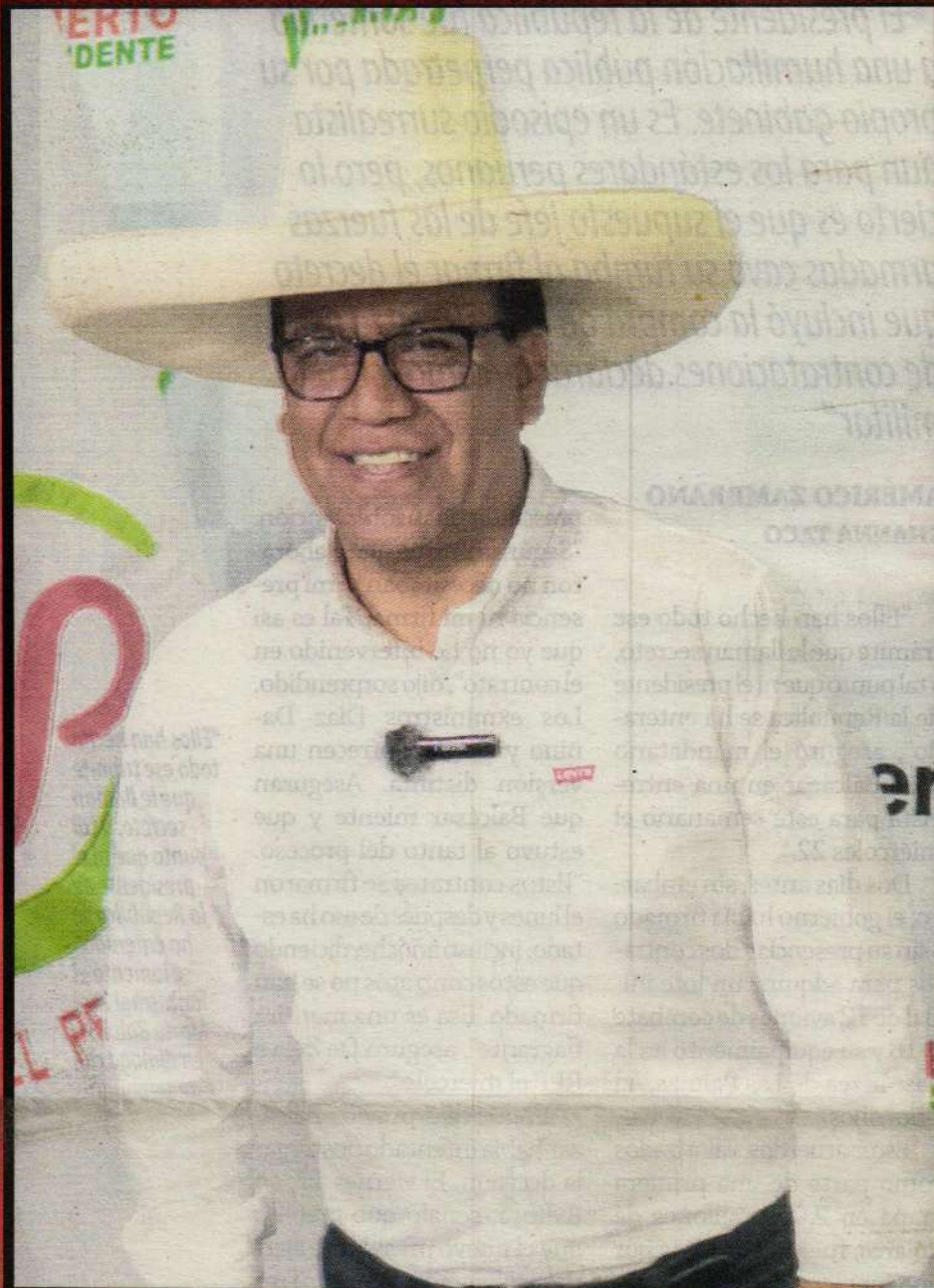
HILDEBRANDT

en sus trece

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



FOTO JOEL DURAN • H13



iSegunda vuelta!

► Definitivo: el balotaje será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Habrá entonces una versión corregida y aumentada del 2021

(5, 6, 7 y 30)

F-16: Balcázar eyectado

(2, 3 y 4)

Balcázar eyectado

► El presidente de la república fue sometido a una humillación pública perpetrada por su propio gabinete. Es un episodio surrealista aun para los estándares peruanos, pero lo cierto es que el supuesto jefe de las fuerzas armadas cavó su tumba al firmar el decreto que incluyó la compra de los F-16 en la lista de contrataciones declaradas como "secreto militar"

AMÉRICO ZAMBRANO
SHANNA TACO

"Ellos han hecho todo ese trámite que le llaman secreto, a tal punto que ni el presidente de la República se ha enterado", aseguró el mandatario José Balcázar en una entrevista para este semanario el miércoles 22.

Dos días antes, sin embargo, el gobierno había firmado –sin su presencia– dos contratos para adquirir un lote inicial de 12 aviones de combate F-16 y su equipamiento en la base aérea de Las Palmas, en Chorrillos.

Estos acuerdos, valorizados como parte de una primera etapa en 2,000 millones de dólares, fueron suscritos por una funcionaria de la compañía estadounidense Lockheed Martin y por el jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico de la Fuerza Aérea, el coronel FAP Alberto Rey Benavente.

Balcázar atribuye la operación a sus entonces ministros de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a quienes responsabiliza de haber actuado a sus espaldas e impulsado una compra que, en su totalidad, comprende a largo plazo 24 aeronaves por 3,500 millones de dólares.

"Fue una falta de respeto, una insubordinación podría decirse. Los ministros dependen de la presidencia. Yo los he sacado de frente, ni las gracias les he dado", afirmó a esta publicación. También sostuvo que el proceso se diseñó para

prescindir de su intervención. "Según la norma que elaboraron no necesitaban ni mi presencia ni mi firma. Tal es así que yo no he intervenido en el contrato", dijo sorprendido. Los exministros Díaz Dañino y De Zela ofrecen una versión distinta. Aseguran que Balcázar miente y que estuvo al tanto del proceso. "Estos contratos se firmaron el lunes y después de eso ha estado, incluso anoche, diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante", aseguró De Zela a RPP el miércoles.

En los días previos Balcázar había intentado postergar la decisión. El viernes 17, en Exitosa, señaló que prefería que el nuevo presidente electo resolviera la compra. Tres días después reiteró en medios nacionales que su gobierno no adquiriría las aeronaves y, en un Mensaje a la Nación, sostuvo que el gasto debía destinarse a otras prioridades.

"Una compra de esta naturaleza no será motivo de una confrontación, de ninguna manera. Lo que se ha dicho, como repito, es que eso (la compra de los aviones) lo conozca el nuevo gobierno que entra al país", sostuvo.

Nadie le hizo caso. El lunes 20 los contratos fueron firmados. Dos días después, el miércoles 22, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó, a través del Banco de la Nación, la transferencia a Nueva York de 462 millones de dólares correspondientes al 30% del

"Ellos han hecho todo ese trámite que le llaman secreto, a tal punto que ni el presidente de la República se ha enterado", se lamentó el fantasmal José María Balcázar en diálogo con este semanario.



primer lote, pese a la decisión anunciada por el mandatario de no ejecutar la compra durante su gestión.

Desde la base aérea de Pucallpa, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, celebró la adquisición. "El trato de los F-16 nos va a ayudar a traer más inversión", declaró al diario "Perú21". Para entonces, el golpe a la decisión presidencial estaba consumado. Balcázar había quedado solo y desautorizado por su propia gente.

Pero la ruta que terminó con los contratos firmados en Las Palmas, y que desató una crisis en el gobierno, había sido abierta semanas antes

con documentos que llevan la firma del propio Balcázar.

El 5 de marzo el presidente suscribió el Decreto Supremo N° 001-2026-DE, que incorporó la compra de los aviones en la lista de contrataciones declaradas como "secreto militar". La norma no menciona de manera expresa a los F-16, pero sí a un expediente presentado por la Fuerza Aérea, sustentado en informes clasificados, que recomendaban su adquisición.

Ese sustento técnico venía desde febrero, cuando la Comandancia General de la FAP concluyó que la compra debía realizarse mediante un procedimiento "no competi-

vo". Es decir, sin competencia abierta, a dedo. La justificación no fue solo técnica. Fue también geopolítica y estratégica. El informe señalaba como única opción viable a los cazas de la fabricante estadounidense Lockheed Martin.

Doce días después, el 17 de marzo, Balcázar firmó otro decreto, el N° 043-2026-EF, que autorizaba 522 millones de soles a favor del Ministerio de Defensa para financiar parcialmente el mismo proyecto descrito en el propio documento como la adquisición de "aviones caza de alto rendimiento". Los recursos, además, no podían destinarse a otro fin.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

Carlos Díaz Dañino, entonces ministro de Defensa, y Hugo de Zela, ex canciller, durante la conferencia de prensa que brindaron la mañana del miércoles 22 de abril. Llamaron mentiroso al presidente y aseguraron que estaba enterado de todo el proceso. Era el caos llamando al Rotafono.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

Aviones de combate F-16 estadounidenses en la base aérea de Las Palmas. Hicieron toda una exhibición.

Balcázar sostuvo a esta revista que creyó estar autorizando presupuestos adicionales para las Fuerzas Armadas, no una compra cerrada de aviones. Pero la secuencia de decretos muestra que primero habilitó el procedimiento bajo secreto militar y luego autorizó recursos para un proyecto que el propio Ministerio de Defensa identificó como adquisición de aviones de combate. Su versión queda en entredicho.

A partir de ese momento, el proceso se movió en estricto secreto militar. Según admiten fuentes vinculadas a la Fuerza Aérea, ese encuadre permitía que la operación se ejecutara sin participación directa del presidente en las etapas finales, en la medida

que los propios decretos habían delegado el procedimiento a las instancias técnicas del sector Defensa.

Especialistas en la materia señalan que la reserva en adquisiciones militares no es inusual. Lo que resulta excepcional, en este caso, es que una compra de esta magnitud avanzara sin intervención directa del jefe de Estado.

La conducción quedó en manos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), bajo el mando del general EP (r) Erwin Solís Ochoa, que siguió el cronograma previsto en el Manual de Contrataciones MN-DPC-001, versión 9. El expediente fue remitido a la Contraloría conforme a la directiva para contrataciones declaradas de

carácter secreto militar.

Todo se aceleró. El 7 de abril la Contraloría emitió una opinión favorable tras revisar la documentación y solicitar información adicional en al menos tres ocasiones, lo que permitió avanzar a la fase final del proceso en tiempo récord. Ese mismo día la Agencia de Compras solicitó a la Fuerza Aérea el expediente de inicio y el proyecto de contrato, ya circunscrito a la oferta de Lockheed Martin.

Una semana después, el 14 de abril, el modelo F-16 Block 70 fue declarado ganador. La firma del contrato fue programada para el 17 en la base de Las Palmas.

Un alto oficial de la FAP, que pidió no ser identificado, dijo que Balcázar tenía previs-

to asistir a la ceremonia de firma, pero que en el trayecto se desvió y terminó en Exitosa, donde anunció públicamente que la compra no procedería. La escena tomó por sorpresa a los altos mandos militares y a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores.

El presidente ofrece una versión distinta. En entrevista con este semanario aseguró que nunca fue invitado a la firma de los contratos y calificó la versión castrense como falsa.

Ese mismo día, según el registro de visitas del Ministerio de Defensa, cinco representantes de Lockheed Martin ingresaron al piso 12 de la sede central de Jesús María y se reunieron con el viceministro de Defensa, Jorge Román Bustamante Albújar. Perma-

necieron allí entre las 6:15 y las 7:28 p.m.

El fin de semana el presidente viajó a Chiclayo para la inauguración de unas obras en Olmos. En Lima, en paralelo, el entonces ministro de Defensa, general en retiro Carlos Díaz Dañino, intentó revertir su decisión. La presión para concretar la firma quedó expuesta en comunicados públicos y gestiones internas, a espaldas del presidente.

“Cumplimos con informar nuestra protesta ante la reciente decisión del Presidente de la República de postergar la firma del contrato (...) La selección del modelo F-16 Block 70 es el resultado de una evaluación técnica exhaustiva realizada por la FAP”, señaló la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen), a la cual pertenece Díaz Dañino.

Para analistas en asuntos militares, el episodio también tiene una dimensión externa. Andrés Gómez de la Torre afirma que “ha habido presiones de Estados Unidos”, y menciona el rol del embajador Bernie Navarro, a quien describe como un actor político vinculado al entorno de Donald Trump y cercano al secretario de Estado Marco Rubio, con una agenda orientada, según su versión, a impulsar la venta de los cazas F-16 frente a intereses chinos en el país.

El lunes 20, mientras el presidente mantenía su negativa en público, el proceso siguió su curso en el terreno militar. Según el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, no existía ningún acto formal que ordenara detener la compra. “El discurso del señor Presidente era claro en su posición política, pero la legalidad va por otro camino (...) No recibí ningún documento que deshiciera lo que ya estaba hecho. ¿Cuál era mi acción correspondiente? Desarrollar la legalidad”, sostuvo en conferencia de prensa el miércoles 22.

En esa línea añadió que “nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra”. Con ese criterio, el Ministerio de Defensa dio luz verde para continuar con el proceso.

Balcázar, que había asumido la presidencia de manera interina el 18 de febrero, no emitió ninguna disposición formal para detenerlo. Su decisión política no se tradujo en

La orden fue transmitida al comandante general de la FAP, Mario Contreras León Cart y. El contrato, así, terminó siendo suscrito por el coronel FAP Alberto Rey Benavente, jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico (SEBAT), en una reunión reservada en la que participó una alta representante de Lockheed Martin.

Para el excomandante general de la FAP, Alfonso Artadi Saletti, una eventual paralización de la compra requeriría un sustento técnico dentro del Consejo de Defensa Nacional, instancia que el propio mandatario encabeza. "Es una situación extraña", dice. "El Consejo de Ministros debería tener una comunicación permanente".

El propio premier lo confirmó ese mismo miércoles. En un comunicado, ratificó la compra de los F-16 como una decisión estratégica del Ejecutivo y defendió la continuidad del contrato para evitar penalidades y preservar la credibilidad internacional del país.

"El esquema de financia-



FOTO ARCHIVO • H13



miento —continúa— no es el adecuado. Se recurre de forma masiva a la deuda pública para adquirir activos militares que no generan retorno productivo directo”.

Con la firma de los dos primeros contratos, la operación quedó en marcha y difícilmente será reversible, al menos en su primera etapa.

El acuerdo suscrito el lunes cubre la adquisición inicial de 12 aviones de combate F-16 Block 70 -10 monoplazas y dos biplazas- por 1,540 millones de dólares, de los cuales ya se adelantaron 462 millones.



El Peruano
Publicado por el Poder Judicial
Fecha: 06-09-2020

 El Peruano | Jueves 3 de marzo de 2020

NORMAS LEGALES

3

la Dirección de Asia, Oceanía y África de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, del artículo 13 de marzo de 2020.

Artículo 2.- Modificar el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 041-2020-MINCETUR, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Apellidos	Pagos anuales Clase Económica US\$
Cecilia Patricia Mesa Quiño	7 500,36

Artículo 3.- Dejar sin efecto el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 041-2020-MINCETUR en el extremo referido a la autorización de viaje de las señoras Cecilia Patricia Beatriz Huamán Linares, Alexandra Cecile Brun Coronado y Angela Lucia Rodríguez Fernández, profesionales de la Dirección de Asia, Oceanía y África.

Artículo 4.- Quedan vigentes los demás extremos de la Resolución Ministerial N° 041-2020-MINCETUR, que no se opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ FERNANDO REYES LLANOS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2492000-1

DEFENSA

Decreto Supremo que aprueba la Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, secreto militar o de orden interno, en el mercado nacional y extranjero

DECRETO SUPREMO
N° 001-2020-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1128, Decreto Legislativo que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), establece que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es la encargada de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa, así como los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías o su cargo, en el mercado nacional y extranjero;

Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 4 del citado Decreto Legislativo establece como una de las funciones de la ACFFAA, ejecutar alguna(s) o todas las etapas de los procesos de contratación en el mercado nacional, mercado extranjero, así como las contrataciones de gobierno o gobierno según corresponda, en concordancia con lo dispuesto en el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa;

Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo antes mencionado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-DE, establece que la ACFFAA tiene a su cargo la ejecución de: (i) los procesos de contratación considerados estratégicos en el mercado nacional y extranjero; (ii) las contrataciones de competencia (OBAC) que se convocan mediante Licitación Pública o Concurso Público cuando su objeto está vinculado a la Defensa y Seguridad Nacional; y (iii) los procesos de contratación considerados estratégicos de bienes, servicios y consultorías en el mercado extranjero requeridas por los OBAC, cuando el objeto de la contratación está vinculado a la Defensa y Seguridad Nacional. Asimismo, el citado artículo establece que los procesos de contratación que ejecute la ACFFAA se encuentran amparados dentro del Plan Estratégico

de Compras del Sector Defensa y en las Listas de Contrataciones correspondientes.

Que, el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa para el periodo 2025-2027, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-DE y modificado por Decreto Supremo N° 019-2025-DE, establece, entre otros, el alcance de los procesos de contratación en el mercado nacional y extranjero, las compras corporativas, la homogeneización, estandarización en el mercado extranjero, homologación y contabilización del requerimiento en el mercado nacional, así como, el Sistema OTAN de Catalogación, garantizando con ello una mayor eficiencia en las contrataciones.

Que, el numeral 5.1 del referido Plan señala que la Lista General de Contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, secreto militar o de orden interno, en el mercado nacional y extranjero es aprobada mediante Decreto Supremo referendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Titular del Sector que lo promueva, de acuerdo a los procedimientos de normativa vigente; precisando que el procedimiento para la opinión favorable de la Contraloría General de la República se sustenta en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la citada Lista General, conforme lo prevé la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Que, la única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 019-2025-DE, establece que las disposiciones contenidas en el "Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa 2025-2027" deben ser aplicadas en concordancia con la normativa que regula esta materia, así como las disposiciones que emita la Dirección General de Abastecimiento, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, mediante Oficio N° 0831-2026-EF/13.01 la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas remitió a la Secretaría General del Ministerio de Defensa el Memorando N° 0157-2026-EF/42.03 y el Informe N° 0070-2026-EF/42.03, en los cuales se precisa que "(...) considerando que mediante el Oficio N° 00035-2026-MINDEFAR-DGRARM se señala que «las instituciones Armadas vienen avanzando la realización de procesos de contratación del mercado extranjero bajo la oferta modalidad de secreto militar», el Decreto Supremo que aprueba la Lista correspondiente no requiere el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que dicho documento constituye un supuesto excedido del ámbito de aplicación de la Ley General de Contrataciones; por lo cual, en este caso, no contiene materias de competencia de este Sector».

Que, a través de la Directiva DIR-OPP-007, versión 02, denominada "Determinación de las contrataciones estratégicas vinculadas a la Norma de Clasificación Nacional a ser consideradas en las Listas Generales y Lista Estratégica de Contrataciones en el Mercado Nacional y Extranjero", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 019-2026-ACFFAA y modificada por Resolución Jefatural N° 026-2026-ACFFAA, se regula el proceso para la determinación de las contrataciones estratégicas vinculadas a la Defensa y Seguridad Nacional que son competencias de la ACFFAA, para su inclusión en la Lista General de Contrataciones con carácter de secreto, secreto militar o por razones de estado interno.

Que, mediante Oficio N° 5-70-LCOP-RS-N° 0139 (Secreto), la Fuerza Aérea del Perú remite la información que sustenta la inclusión de la contratación vinculante al proyecto de inversión con CUI N° 2273-425 en la Lista General de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, de secreto militar, o de orden interno en el mercado nacional y extranjero, a cargo de la ACFFAA.

Que, mediante Oficio N° 006-2026-ACFFAA (Secreto), el Presidente de la Comisión de Contratación estratégica vinculante a la Defensa y Seguridad Nacional o ser contempladas en la Lista General de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras realizadas por las Fuerzas Armadas declaradas de carácter secreto, secreto militar o de orden interno en el mercado nacional o extranjero,

El 5 de marzo el propio presidente José Balcázar suscribió el Decreto Supremo N° 001-2026-DE, que incorporó la compra de los aviones en la lista de contrataciones declaradas como "secreto militar". Allí empezó todo.

El resto del paquete, unos 460 millones de dólares adicionales, se ejecutará a través del programa Foreign Military Sales (FMS), un esquema de ventas del gobierno de Estados Unidos que incluye equipos de apoyo en tierra, repuestos, entrenamiento, documentación técnica, un simulador de vuelo y un lote

inicial de armamento.

La segunda fase del proyecto, aún sin contrato firmado, comprende la compra de otros 12 cazas F-16, que será financiada con recursos ya autorizados por el Presupuesto Nacional a través de endeudamiento público. En conjunto, la operación asciende a 3,500 millones de dólares.

En Washington, de acuerdo con esas fuentes, había preocupación por un eventual triunfo del candidato izquierdista Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori y por la posibilidad de que un nuevo gobierno revisara, postergara o paralizara la compra. Con los contratos ya firmados, ese escenario resulta ahora menos probable.

Los mandos de la FAP llevaban casi dos décadas intentando renovar su flota de combate. Ningún gobierno anterior quiso comerse el pleito por falta de recursos. Durante la administración de Dina Boluarte, hubo una propuesta para comprar una flota de aviones suecos Gripen, fabricados por Saab. Hubo acercamientos de la empresa al entorno presidencial y un estudio técnico que mencionaba esa opción, pero la decisión política no llegó y el presupuesto tampoco estaba listo. El giro ocurrió después. Primero con el gobierno interino de José Jerí, que abrió el camino presupuestal, y luego con el de Balcázar, que firmó los decretos que habilitaron el secreto militar y el financiamiento parcial de la operación. En pocos meses, la Fuerza Aérea consiguió avanzar en una compra que había perseguido durante años.

Para cuando Balcázar intentó detenerla, el proceso ya no dependía solo de él. La decisión había pasado por decretos, informes secretos, opinión de la Contraloría, presión militar, gestiones diplomáticas y desembolsos del MEF. El presidente interino terminó descubriendo que el cargo le daba el mando formal de las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente el control real de una operación de alto vuelo.

La compra de los F-16 fue una prueba de poder. Y Balcázar la perdió.

Segunda vuelta



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



FOTO JOEL DURÁN • H13

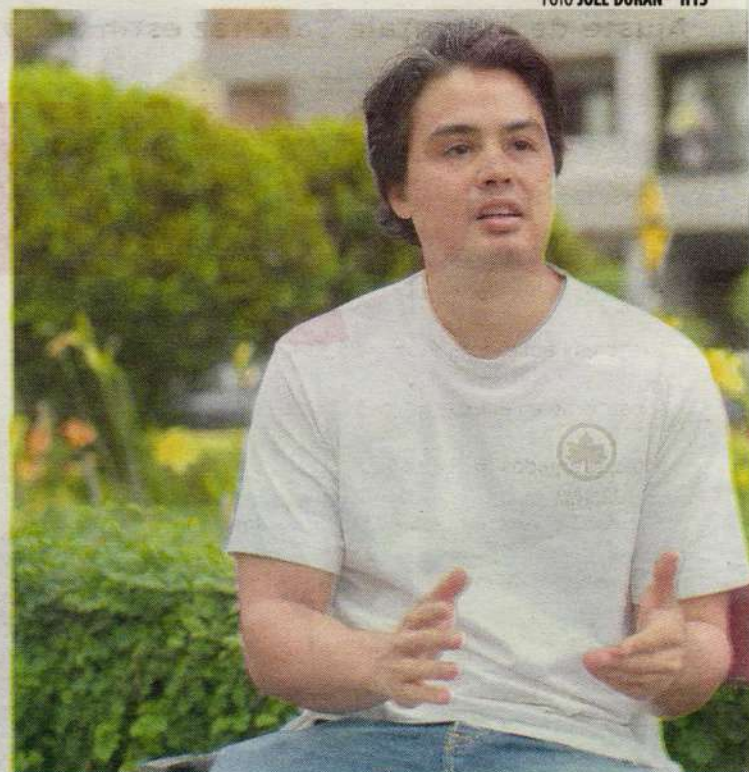
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: el mandato de las cifras.

► **Definitivo: el balotaje será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Habrá entonces una versión corregida y aumentada del 2021**



Analista de datos y consultor en tecnología Matías Faure: "Estimo que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga al 100% de actas sería de 23,200 votos a favor del primero".

Mientras el conteo culmina, las proyecciones mantienen a Rafael López Aliaga fuera de la segunda vuelta, lejos de la tesis que atribuye su desventaja a un presunto fraude.



AMÉRICO ZAMBRANO

Mientras el conteo oficial sigue abierto, los primeros ejercicios de proyección sobre actas observadas, voto del exterior y mesas afectadas por retrasos comienzan a perfilar al izquierdista Roberto Sánchez como probable rival de Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta.

En paralelo, los cálculos disponibles no encuentran evidencia suficiente para sostener que las demoras logísticas y el ausentismo hayan alterado el orden entre el segundo y el tercer lugar. Incluso bajo distintos escenarios, el ultraderechista Rafael López Aliaga se mantendría detrás de Sánchez.

El margen entre ambos candidatos sigue siendo estrecho

en el conteo oficial preliminar –poco más de 21,773 votos a favor de Sánchez al 95,040% de avance–, lo que ha convertido a las actas pendientes en el factor decisivo. Ese universo incluye actas observadas, mesas aún en revisión y el voto en el exterior, que históricamente presenta patrones distintos al voto nacional.

Sobre ese conjunto incompleto es que se construyen las proyecciones. Se trata de estimaciones independientes, no oficiales. El analista de datos y consultor en tecnología Matías Faure, por ejemplo, ha trabajado a partir de las actas observadas descargadas en formato PDF y de estimaciones para aquellas sin información disponible.

"Todo empieza por la API de la ONPE", señaló Faure refiriéndose al sistema que permite acceder directamente a la información electoral. A diferencia de la página web

–explicó–, esta herramienta es utilizada por los programadores para consultar datos específicos –como resultados por distrito o por mesa– sin pasar por el navegador y con mayor nivel de detalle. A través de ese acceso, pudo identificar, descargar y procesar las actas observadas aún no incorporadas al conteo oficial, tanto con PDF como sin él, en el país y en el exterior.

Para las actas que sí cuentan con PDF, Faure, de 34 años, extrajo directamente los votos consignados por los miembros de mesa. En los casos en que los documentos eran escaneos –la mayoría– utilizó un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para convertir las imágenes en datos. Con ese procedimiento obtuvo un primer conteo parcial de votos para Sánchez y López Aliaga dentro del total de actas observadas.

El problema es que no todas las actas están disponibles en ese formato. Una parte no tiene PDF, por lo que sus resultados no pueden leerse directamente. Para ese grupo, Faure aplicó una estimación aparentemente simple: asignó valores en función del comportamiento electoral del distrito al que pertenece cada mesa. Es decir, asignó votos replicando la proporción que ambos candidatos ya registran en esa misma zona.

La composición de esas actas también resulta relevante. De las más de 5,600 actas observadas, alrededor del 43% proviene de regiones donde Sánchez lidera la votación, mientras que cerca del 19% corresponde a zonas en las que el puntero es López Aliaga. Esa distribución territorial introduce un sesgo que, en conjunto, tiende a favorecer al candidato de JP.

Con la combinación de datos duros más estimaciones, reconstruyó un escenario más completo de las actas pendientes. Ese primer cálculo arrojó una ventaja mayor para el candidato de Juntos por el Perú (JP), de aproximadamente 31,360 votos, que luego se redujo al incorporar el voto en el exterior, donde López Aliaga tiene mejor desempeño.

Con la base de datos ya actualizada –luego de que la API de la ONPE comenzara a reflejar las mismas actas que la web oficial–, Faure ajustó su proyección. El efecto del voto exterior recorta parte de esa ventaja, pero no la revierte. Faure estima que, al cierre del 100% del conteo, Sánchez mantendría una ventaja cer-

cana a los 23,000 votos sobre López Aliaga. "Dentro de estas actas observadas, el resultado es positivo para Sánchez", dijo Faure en una conversación con este semanario.

Otros análisis independientes, con metodologías distintas, apuntan en la misma dirección. El ingeniero informático Gonzalo Márquez elaboró tres escenarios a partir de la información disponible. En todos los casos, Sánchez se mantiene en el segundo lugar.

En una proyección regional, la diferencia alcanza los 21,568 votos. Un segundo ejercicio, basado en estimaciones distritales, la reduce en 16,430. Y en un tercer escenario, que incorpora las actas impugnadas bajo un criterio conservador, la brecha se amplía hasta los 25,630 votos. "Las tres convergen", sostuvo Márquez: "Sánchez consolida el segundo lugar por entre 16,000 y 26,000 votos".

La discusión se traslada entonces a un segundo punto: si las demoras en la instalación de mesas, especialmente en Lima, pudieron alterar el resultado. López Aliaga ha sostenido que esos retrasos afectaron su votación.

Faure abordó esa pregunta midiendo la relación entre la hora de la apertura de las mesas y el nivel de participación. A partir de los registros de la ONPE, identificó un patrón: por cada hora de demora en la instalación, el ausentismo aumentó en aproximadamente 0,79 puntos porcentuales en los distritos más afectados por los retrasos.

El propio analista advierte, sin embargo, que los datos

Ajuste de la ventaja Sánchez estimando las actas del exterior sin datos

Elecciones Generales 2026 - Presidencial — elaborado por Matías Faure
Supuesto: cada mesa sin datos tiene - 300 electores hábiles, ausentismo 66% (promedio contabilizadas exterior), RLA 19.50% y Sánchez 1.98% sobre votos emitidos (contabilizadas exterior) - Datos: ONPE

Concepto	Valor
Actas sin estimar en el exterior (obs. sin PDF + pendientes)	486
Electores hábiles por mesa (promedio)	300
Electores hábiles totales = 486 x 300	145,800
Ausentismo en el exterior (según actas contabilizadas)	66%
Votos estimados = 145,800 x 33%	48,114
% RLA en el exterior (sobre votos emitidos)	19.50%
% Sánchez en el exterior (sobre votos emitidos)	1.98%
Diferencia porcentual (RLA - Sánchez)	17.52%
Margen RLA en el exterior sin estimar = 48,114 x 17.52%	+8,430
Margen previo a favor de Sánchez (tabla anterior)	+31,630
Margen final Sánchez = 31,630 - 8,430	+23,200

La proyección de Faure comprende actas impugnadas y votos del exterior.

Ventaja Sánchez ajustada por estimación del exterior
+23,200 votos netos
Margen previo +31,630 - Margen RLA en exterior sin estimar +8,430

Efecto Galaga sobre los votos de RLA según el alcance del análisis

Regresión independiente por alcance · Contrafactual: 7:00 a.m. · Elecciones Generales 2026 — Elección Presidencial · 25,166 actas contabilizadas de 26,368 en Lima (4.6% pendientes) · Elaborado por Matías Faure

Alcance	Actas con hora de inst.	Pendiente (pp/hora)	Ausentes extra	RLA perdió	Sánchez perdió	Ventaja neto RLA vs. Sánchez
9 distritos Galaga	3,433	+0.80%	27,750	8,029	567	+7,462 votos
Todo Lima	23,166	+0.78%	55,923	13,438	1,368	+12,070 votos
Simulación	5,263	+2.50%	36,650	10,614	797	+9,817 votos

Pendiente = pp de ausentismo adicionales por hora de retraso en instalación de mesa · Factor de escala aplicado para proyectar de actas con hora al total de actas · Datos: ONPE
Simulación: 5,263 mesas · pendiente forzada +2.50 pp/hora · shares promedio 9 distritos Galaga — RLA 28.96% · Sánchez 2.17%

Los análisis de las actas muestran que la apertura tardía de las mesas sí tuvo efectos reales en el nivel ausentismo, pero ese escenario no cambia el orden de los resultados.

disponibles sobre la hora de instalación de las mesas no comprenden todos los casos de retraso. Transparencia estimó que el 13 % de mesas no había abierto aún a las 2 de la tarde, un dato que no aparece en los registros utilizados para este análisis. Aun así, esa limitación no impidió estimar el efecto general de las demoras, aunque sí introdujo un margen de incertidumbre en los casos más extremos.
Con esa relación, Faure estimó el efecto de las demoras sobre la participación y proyectó cómo se habrían distribuido esos votos entre los principales candidatos. El cálculo se hizo mesa por mesa. Primero determinó el ausentismo atribuible al retraso, luego asignó esos votos según la

proporción de cada candidato y, finalmente, obtuvo un impacto total.
Según el análisis, en los nueve distritos más afectados por la demora de la entrega del material electoral (Miraflores, San Borja, Surco, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, San Bartolo, Lurín y Pucusana), López Aliaga habría dejado de obtener una ventaja de 7,462 votos. Extendiendo el análisis a toda Lima, esa cifra ascendería a 12,070 votos.
Faure también ensayó un escenario más exigente para compensar la falta de información sobre las mesas tardías. En ese ejercicio, asumió que hasta el 20% de las mesas en Lima se vio afectado por los retrasos y que el impacto

sobre el ausentismo fue considerablemente mayor, hasta 2,5 puntos porcentuales por hora, más de tres veces el observado en los datos reales. Bajo esos supuestos, la pérdida estimada para el candidato de Renovación Popular en las mesas de nueve distritos de Lima se ubicaría en torno a los 9,800 votos.
Ninguno de estos escenarios, sin embargo, se acerca a la ventaja proyectada de 23,000 votos a favor de Sánchez en el conteo final. Según concluye el analista de datos, las demoras pudieron influir en la participación, pero no alcanzan, con la evidencia disponible, para que López Aliaga supere a Sánchez y pase a la segunda vuelta.
Un segundo análisis inde-

pendiente, realizado por el ingeniero Gonzalo Márquez, llega a conclusiones parecidas a partir de un enfoque distinto. El experto observó qué ocurrió en distritos específicos.
Márquez analizó el caso de Miraflores, uno de los lugares donde las demoras en la apertura de mesas fueron evidentes y donde, además, López Aliaga obtuvo una votación mayoritaria. Sus resultados confirman que en dicho distrito cada hora de demora en la apertura de mesas estuvo asociada a un mayor ausentismo.
A partir de esos datos, estimó cuántas personas dejaron de votar por la tardanza. El resultado es una cifra cercana a los 3,700 votos no emitidos en Miraflores, equivalente a

cerca del 2,8% del padrón del distrito.
Ese efecto, sin embargo, parece ser limitado. Incluso en Miraflores, donde el candidato de Renovación Popular concentra apoyo mayoritario, esos votos habrían ampliado su ventaja local, pero no registrarían alteraciones en el resultado general, según el experto. A escala nacional, representan una proporción mínima del electorado y no alteran la disputa por el segundo lugar.
El caso de Miraflores, además, no se replica automáticamente en toda la capital. Cuando el análisis se amplía a varios distritos, como en los cálculos de Faure, el impacto

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Rostros del Senado

► Hay de todo en el elenco de la todopoderosa "cámara alta" fabricada contra la voluntad popular. La única buena noticia es que Fuerza Popular cosechó menos asientos de lo que esperaba

FABRICIO CABRERA BUDEN

Habemus senatores. Es hora de ponerle rostro a la institución más poderosa del Estado. En el recuento destacan un investigado por lavado de activos, un conductor que huyó de la Policía y que en la fuga casi atropella a un agente, un sentenciado por estafa, uno por difamación y otro denunciado por agresión. El consuelo es que más de la mitad del país (51%) no votó por ninguno de los candidatos electos que jurará "por Dios y por la patria" el próximo 26 de julio.

El Instituto Aklla, con información en tiempo real de la página de la ONPE, ha elaborado una suerte de "croquis" de lo que será la Cámara Alta. La torta se repartirá entre seis partidos.

Fuerza Popular, aunque se llevará la tajada más grande, ha rebajado considerablemente sus expectativas. Obtiene 22 de los 60 escaños. Le sigue Juntos por el Perú, cuya bancada será liderada por José Castillo Terrones, con 14 representantes. Bastante más lejos se quedarán Renovación Popular (8) y Buen Gobierno (7). Y un poco más abajo, Obras, que obtendría 5, y Ahora Nación, con 4 senadores.

Sobre la representatividad real de este Senado, menos de la mitad del país se sentirá identificado con alguno de los elegidos. De los 23'914,595 votos que se emitieron para escoger a

los senadores, sólo el 49% rindió frutos. Es decir, el 51% restante no sirvió de nada porque el partido no pasó la valla electoral.

Marisol Pérez Tello, por ejemplo, que además de candidatear a la presidencia por Primero la Gente también postulaba al Senado, obtuvo 119,405 votos preferenciales. Como el partido no superó la valla, quedará fuera.

Al otro extremo está el congresista Víctor Raúl Cutipa, de Juntos por el Perú, que obtendrá un asiento en el Senado con 1,941 votos preferenciales. O el caso de Fuerza Popular que, sumando las cédulas de sus 12 senadores menos votados, no llega a los 119 mil obtenidos por Pérez Tello.

"Esto es un récord histórico. Tenemos que los votos perdidos (11'973,982) son más que los votos representativos (11'940,613) por el tema de la valla. Esto es responsabilidad del actual Congreso", señala José Tello, presidente del Instituto Aklla.

De momento, ningún partido de los que se han metido en la flamante cámara se anima a hablar de alianzas. "Dependerá de los acuerdos. Es muy prematuro. Las elecciones presidenciales son claves para definir la conducción del Congreso", señala un virtual senador fujimorista.

Alejandro Aguinaga, electo senador por Fuerza Popular, afirma que no habrá dificultad para alcanzar consensos con otras bancadas "por el bien del país".

Distribución de la Cámara de Senadores. Hay un investigado por lavado de activos, un denunciado por agresión, otro por huir de la Policía, sentenciados por corrupción y por estafa. Todo un cóctel.

DISTRIBUCIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES



FUERZA POPULAR:							

La virtual senadora Mirtha Vásquez, del partido Ahora Nación, advierte que aún no termina el recuento y ya hay partidos con representación en el Senado que están a la deriva. "Obras no es un partido de izquierda. Su líder se deshizo de ellos. No se sabe qué liderazgo ni a qué propuesta responden. La derecha va a tener la habilidad de jalarlos a sus filas. Sobre Buen Gobierno, preocupa su postura sobre el fraude. Han dicho que no tienen compromiso con ningún partido y eso los coloca en una posición ya vista, como lo fue Alianza para el Progreso", señala.

Desde Juntos por el Perú, la virtual senadora Silvana Robles descarta alianzas sin bases programáticas. Por ahora el partido está centrado en la defensa del resultado elec-

toral. "No vamos a legitimar ni compartir agenda con quienes desconocen la voluntad popular", dice.

De los 60 senadores, 14 gestaron su flamante puesto en el Senado desde una curul del Congreso. En esa lista figuran los fujimoristas Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano y Alejandro Aguinaga. Por Renovación Popular saltaron del Congreso al Senado Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, y por Juntos por el Perú Silvana Robles, Jaime Quito y Víctor Cutipa.

También están los que vuelven de las catacumbas o aquellos que interpretaron el papel de topes y ahora son recompensados con una curul. De la vieja guardia fujimorista regresa Martha Chávez. Y también obtuvo curul José Arista, ministro de Econo-

mía durante el gobierno de Dina Boluarte.

Renovación Popular trajo de regreso a la exfujimorista Lourdes Alcorta Suero. Buen Gobierno lleva a Nora Bonifaz, prima del exalcalde de Lima y fundador de Somos Perú, Alberto Andrade.

Y luego están los que llegan a la Cámara Alta con una cartera de anticuchos judiciales o morales. Destaca en este pelotón Jacques Salomón Rodrich Ackerman, de Fuerza Popular. El marido de Cecilia Chacón tiene en su haber un parte policial dando cuenta de un choque y fuga.

El empresario, que fue intervenido por la Policía en el cruce de las avenidas Faucett con Argentina, optó por desobedecer a la autoridad. "Recibimos insultos como coimero, ladrón, mentadas de madre

AHORA NACIÓN:

 PABLO ALFONSO LÓPEZ CHAU NAVA

 JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA

 RUTH LUQUE IBARRA

 MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN

14

8

7

5

4



FOTO ARCHIVO • H13

Victor Cutipa: ejemplo viviente de la cifra repartidora. Al cierre de este informe logró un escaño en el Senado con 1,941 votos preferenciales.



FOTO JOEL DURÁN • H13

José Castillo Terrores: hermano mayor del expresidente Pedro Castillo. Fue el candidato más votado (262,285) de Juntos por el Perú.



Jacques Rodrich: esposo de la virtual diputada Cecilia Chacón. Obtuvo 11,406 votos preferenciales y tiene una denuncia policial por intentar huir de la Policía.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

"Obras no es un partido de izquierda. Su liderse deshizo de ellos. No se sabe qué liderazgo ni a qué propuesta responden. La derecha va a tener la habilidad de jalarlos a sus filas", señala la virtual senadora de Ahora Nación Mirtha Vásquez.

y se negaba a la intervención", señala el acta policial del 2012.

La denuncia indica que en la fuga Rodrich "condujo su vehículo chocando el vehículo policial" y casi atropella a un agente.

Otro fujimorista es Miguel Ángel Torres, con 274,425 votos preferenciales, la cifra más alta. Tiene una investigación junto a integrantes de Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de activos.

En la edición del 13 de noviembre del 2025 este semanario reveló que el Ministerio Público investiga a Fuerza Popular por recibir dinero de procedencia "desconocida" para la campaña de 2021. La investigación es por "financiamiento ilegal de partidos políticos". A Torres lo sindicaron como personaje clave en la captación de dinero.

"En su condición de vocero oficial, habría cumplido un rol operativo en la estrategia de impugnación electoral, participando en la captación y uso de fondos no bancarizados -ascendentes a S/1'286,058- para el pago de tasas ante el Jurado Nacional de Elecciones, sin respaldo legal", señala el expediente.

Otro senador fujimorista con proceso es Fernando Rospigliosi, sentenciado en primera instancia por difamación contra la ex Fiscal de la Nación Delia Espinoza.

Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador de Ucayali, hoy senador por Fuerza Popular, fue condenado en 2017 a 5 años y 4 meses de prisión. La sentencia recoge que Velásquez dirigió una adjudicación para que su abogado le alquilara un inmueble al

gobierno regional. El monto mensual de la renta era de 24,000 soles. El flamante senador purgó prisión hasta que en junio del 2024 el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

En el Partido del Buen Gobierno, el virtual senador Jorge Gavidia Rodríguez declaró ante el JNE tener una sentencia por el delito de "estafa dentro de una sociedad privada" del 7 de febrero del 2012. Purgó prisión suspendida. Gavidia también registró una sentencia familiar por incumplir el pago de alimentos.

El virtual senador por Obras Daniel Barragán Coloma fue denunciado por su compañero de partido Víctor Urpeque Silva. Según dice el acta policial, los dos militantes se agarraron a golpes y empujones durante una reunión del partido.

Ocurrió en enero de 2025. Barragán fue ministro de Defensa de Pedro Castillo.

El exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes dice que el Senado será la institución más poderosa del Estado. Además de designar a altos funcionarios, como miembros del Tribunal Constitucional, contralor, defensor del Pueblo y di-

rectores del Banco Central de Reserva, puede dejar sin efecto decretos supremos del Ejecutivo.

"Estamos ante un régimen nominalmente bicameral, pero en la práctica es distinto porque el Senado tendrá potestades superiores a las del Congreso unicameral. No podrá ser disuelto. Es un órgano con amplio poder", señala.

La ONPE fracasó. La jornada en la que debió lucirse, el ente electoral administrado por Piero

Corvetto terminó armando un desastre sin precedentes. Al cierre de esta edición, el juez de investigación preparatoria Manuel Chullo evaluaba una solicitud de detención preliminar contra Corvetto, los gerentes de la ONPE y el empresario Juan Alvarado, de la empresa Gálaga. La Fiscalía le imputa los delitos de colusión y omisión de funciones, entre otros.

Este martes, sabiendo lo que se venía, Corvetto había presentado su carta de renuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que la aceptó inmediatamente, aun cuando el cargo es irrenunciable.

“Los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”, escribió el exjefe de la ONPE en su misiva.

La Fiscalía no cree que se trate de hechos aislados — como señala Corvetto — ni de simples errores. Por ello, el fiscal Raúl Mendoza Huamán abrirá investigación por dos cargos contra Corvetto.

El primero es por colusión. La hipótesis es que, como jefe de la ONPE, tenía la obligación de controlar y articular con los gerentes de la institución el cumplimiento del contrato con la empresa Gálaga.

La otra investigación es por omisión de funciones. En este caso el fiscal considera que los funcionarios actuaron dolosamente. Habrían tenido conocimiento previo de las deficiencias que iban a producirse en la jornada electoral y no hicieron nada para evitarlas.

El fiscal Mendoza sustenta su tesis en la información recabada durante los allanamientos al almacén de Lurín de la ONPE y en los informes de fiscalización de la Contraloría del viernes 10 y el domingo 12 de abril. De toda esta documentación se desprende que los funcionarios de la ONPE sabían lo que se venía.

“Si hacemos una revisión minuciosa de los informes de Contraloría, se evidencia claramente que la semana previa a las elecciones la ONPE tenía serios problemas de plazos con las contrataciones, no

Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Es investigado por los delitos de colusión y omisión de funciones.



Botar a la ONPE

► Parecía una conspiración tramada por idiotas: las computadoras fallaron porque no se configuraron, muchas impresoras no funcionaron, el material electoral se trasladó en taxis por aplicativo en plena madrugada y decenas de actas — por lo menos en 104 mesas — sencillamente se extraviaron o siniestron. Todo eso después de que miles de centros de votación abrieron recién a la una o dos de la tarde

solo en Lima sino en distintas regiones. Esas deficiencias demuestran que no se trató de un hecho aislado y que había señales de alerta que debían atenderse”, afirma José Treles, abogado especialista en contrataciones públicas.

Este último lunes representantes de Gálaga se reunieron con funcionarios de la ONPE en las oficinas del jirón Washington. El cónclave fue convocado por Gustavo García, el reemplazo del exgerente José Samamé. El objetivo era escla-

recer lo ocurrido durante el reparto del material electoral.

Según fuentes cercanas a la reunión, el problema central fue la demora en el despacho del equipo tecnológico a los camiones de Gálaga. De acuerdo con el plan de operaciones de la ONPE, dos camiones debían transportar el material a cada sede: uno con el equipo tecnológico como laptops e impresoras, y otro con las cédulas, actas y ánforas.

El inconveniente surgió cuando los equipos informáticos no podían ser despachados por problemas en su configuración y, además, deficiencias en el embalaje.

La empresa propuso entonces que los camiones con las cédulas y ánforas, listos desde el sábado por la mañana, partieran de inmediato y que las elecciones se desarrollaran de manera tradicional, con lápiz y papel. Los funcionarios de la ONPE se negaron.

Juan Phang, exsubgerente de Producción Electoral, entrevistado por funcionarios de la Contraloría, reconoció que los equipos informáticos habían sido utilizados para simulacros de votación y no se reconfiguraron para los

comicios del 12 de abril.

Cuando él mismo le sugirió a José Samamé optar por las elecciones tradicionales en Lima, la respuesta fue negativa, “aduciendo que se afectaría la meta institucional”, declaró Phang.

La ONPE había gastado más de 41 millones de soles en la adquisición de 31,234 computadoras portátiles y 9,550 impresoras para implementar el STAE, un sistema digital de conteo de votos. Este programa informático terminó produciendo el desastre porque, en miles de mesas, no funcionó correctamente.

Las fallas técnicas de las laptops obligaron a decenas de miembros de mesa a quedarse hasta altas horas de la noche contando votos a mano.

También fallaron las impresoras que la ONPE le adquirió al Consorcio Alpha y Omega por 9,5 millones de soles.

“La permanencia de Corvetto era inviable políticamente. Ya había un clima previo a la elección de desconfianza y estos graves errores terminaron por golpear la legitimidad del proceso”, afirma el abogado José Tello.

Las negligencias operativas



Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Promovió la denuncia penal contra Piero Corvetto y lo desmintió en el Congreso. No ha dicho nada aún de por qué los fiscalizadores de su institución no alertaron antes el desastre que se venía.

respaldo digital de actas y abandono de mesas por el colapso del STAE. También se ha reportado la pérdida de actas físicas, pero en la gran mayoría de casos aún no se conocen los detalles.

La renuncia de Corvetto también está relacionada a la detención en "flagrancia" del exgerente de la ONPE José Samamé por omisión de funciones. La detención la dispuso la Dirección contra la Corrupción (Dirccor) de la Policía y se hizo sin requerimiento fiscal ni judicial. Penalistas consultados por esta revista calificaron la decisión como apresurada y atípica. Samamé tuvo que ser liberado dos días después.

"Yo no recuerdo un precedente así, que la Policía intervenga a un funcionario porque cometió omisión de funciones. Si esa fuera la regla, creo que nos quedaríamos sin Estado", afirma el abogado penalista Elí Vidal.

Y hace unos días la Dirccor filtró a los medios un informe donde recomendaba la



Miembros de mesa de un colegio en el Callao anularon la votación porque el STAE, un sistema digital de conteo de votos recién implementado, colapsó a las 2 de la madrugada. La ONPE gastó 41 millones de soles en laptops e impresoras.

no se limitaron al fracaso del STAE y al reparto del material. Las sedes descentralizadas de la ONPE en Lima tuvieron menos de 48 horas para contratar taxis que trasladaran el material electoral de regreso a sus oficinas. En muchos casos, los funcionarios terminaron tomando taxis por aplicativo y de la calle, a altas horas de la madrugada, sin apoyo policial ni del Jurado Nacional de Elecciones.

Las consecuencias no tardaron en llegar. En Surquillo aparecieron en una calle cuatro cajas de cédulas que habían sido olvidadas en un taxi. El escándalo no hizo más que seguir creciendo.

En San Borja, una trabajadora de la ONPE reportó la pérdida de 17 actas durante su traslado al centro de cómputo. En San Juan de Lurigancho, ocho actas se extraviaron camino a la oficina descentralizada. En total, la ONPE presentó cinco denuncias formales ante la Policía por pérdida de material electoral.

Hasta la fecha, la entidad ha reportado 104 mesas en la capital con actas extraviadas o siniestradas, incluyendo pérdidas o fallas de USB con



Taxi involucrado en el traslado de actas extraviadas en Sencico va abarrotado con material electoral que debería contar con custodia policial y supervisión de fiscalizadores del JNE.

detención de Corvetto y otros funcionarios.

El policía a cargo del caso es el mayor Jorge Rodríguez Menacho, quien dos años atrás fue protagonista del caso "Valquiria" y señalado por la Fiscalía como presunto infiltrado de Patricia Benavides en la División de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.

"Ese documento es una especie de opinión, hasta ahí nomás llega. No es un criterio vinculante para el Ministerio Público de ninguna manera, quien tiene al final la última palabra", afirma Vidal.

El martes, tras su renuncia, Corvetto se presentó ante el fiscal para entregar sus dos pasaportes, peruano e italiano, y se allanó al levantamiento

del secreto de sus comunicaciones.

Esa misma noche el Fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez reveló en televisión que el fiscal Mendoza había solicitado la detención preliminar del exjefe de la ONPE.

En el entorno de Corvetto señalan a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como uno de los principales responsables de precipitar su salida. La denuncia penal formulada por la procuraduría del JNE y la presentación de Burneo ante el Congreso el viernes pasado fueron golpes mortales para Corvetto.

Burneo afirmó que habían advertido a la ONPE de los errores en las impresoras del STAE y dio detalles sobre las cajas con cédulas que aparecieron abandonadas en Surquillo.

"La denuncia penal del JNE tuvo la intención de meter más leña al fuego. Ahora, el Jurado no puede decir que no sabía lo que estaba ocurriendo. Tiene una dirección de fiscalización, ellos estaban *in situ* en Lurín, en los colegios. Lo sabían desde el viernes. ¿Por qué Burneo no lo alertó antes?", dice José Tello.

La crisis de la ONPE ha servido para alimentar las posiciones más ultramontanas de la política local. Un grupo de exmilitares en retiro reclamó la intervención de las Fuerzas Armadas en la segunda vuelta y sugirió la existencia de un fraude estructurado.

"Acá no hay fraude en ningún extremo. Para eso se necesitaría un nivel de coordinación complejo entre los organismos electorales, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, que a todas luces no existe", sostiene Tello.

"Esto no se trata de errores de los miembros de mesa, o hechos aislados. Se trata de que el Estado no hizo su trabajo para poner en igualdad de condiciones a todos. No soy un fraudista, pero les han dado todos los insumos para instalar esa narrativa", afirma José Naupari, abogado experto en asuntos electorales.

Bernardo Pachas Serrano, el reemplazo de Corvetto, se desempeñaba como gerente general de la institución. Se conocen desde hace muchos años, cuando trabajaron juntos en Reniec. Por ahora, Pachas no ha sido comprendido en las investigaciones de la Fiscalía ni de la Contraloría. ■

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea. Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.



Donar aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Derrota de un incompetente



DANIEL ESPINOSA

ejemplar, al desobediente.

El "Times" continúa con la farsa asegurando que los traspiés de EE. UU. en Irán tendrían el efecto de "debilitar la democracia global". Aquí estamos ante uno de los logros más importantes de la propaganda occidental: consiguió instalar la noción de que un imperio –dedicado a la imposición de dictaduras sanguinarias y las guerras de agresión– puede ser, al mismo tiempo, una democracia, siempre y cuando mantenga algunas de las características de un sistema democrático dentro de sus fronteras. Por suerte, la noción de que un *apartheid* (como el israelí) podría, al mismo tiempo, ser una democracia, sí ha sido rechazada por el mundo.

Otros grandes nombres de la prensa corporativa coinciden en presentar la guerra en Irán como un fracaso estadounidense: "Donald Trump es el más grande perdedor en esta guerra" ("The Economist"); "La guerra en Irán de Trump deja a EE. UU. debilitado a ojos de sus adversarios" ("Bloomberg"); "La derrota estratégica y moral de Trump en Irán" ("The New Yorker"); "Expertos advierten que los objetivos de EE. UU. en Irán permanecen fuera de alcance" (CNN); "La estrategia de Trump en Irán se da contra un muro" ("Político").

Quien desee entender las razones de esta derrota fundamental no necesitan indagar demasiado, pues basta con mirar dentro de la Casa Blanca para entender que quienes le hablan al oído a Trump –el incompetente en jefe– conforman

una curiosa (y bastante arrogante, vale la pena agregar) sarta de ineptos.

En el medio independiente británico "Middle East Eye", los periodistas Irfan Chowdhury y Peter Osborne compararon el nivel intelectual, los logros académicos y la experiencia de los políticos iraníes, con los de los integrantes del circo que levantó su carpa en Washington, demostrando con facilidad que el liderazgo iraní es "bastante más sofisticado, inteligente, letrado y competente que el de los EE. UU. de Trump".

Los editorialistas de "The New York Times" dicen no alegrarse por los fracasos de Trump, que arrastran consigo a todo su país. Su posición es la correcta, por supuesto, pero no es la que debería adoptar el resto de un mundo que quizás pronto pueda empezar a soñar con liberarse de un imperialismo que, de acuerdo con el analista John Mearsheimer, ha costado, sólo entre 1971 y 2021 y a través del uso ilegal de sanciones, treinta y ocho millones de vidas humanas. ¡Viva Trump!

En un solo día, Donald Trump pasó de amenazar a los iraníes con el aniquilamiento de su civilización –una amenaza descaradamente genocida– a anunciar un alto al fuego basado en un plan de diez puntos redactado por los mismos iraníes, plan al que el errático inquilino de la Casa Blanca se refirió como "trabajable". Estados Unidos no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos en Irán, y quienes están presentando esta guerra como una derrota del aún poder hegemónico no son los enemigos de Trump, sino sus aliados, la gran prensa y los analistas internacionales más reputados.

En una reciente entrevista para la BBC, Tucker Carlson –uno de los líderes de opinión más seguidos del mundo y hasta hace no mucho uno de los aliados ideológicos más importantes de Trump– dijo que el republicano es un "esclavo de Israel", y que la guerra contra Irán no responde a intereses estadounidenses. Carlson es el más importante de una docena de *influencers* del movimiento "Make America Great Again" (MAGA) que ha renegado de Trump, iniciando una suerte de guerra civil dentro de ese movimiento. Carlson dice que la guerra de Irán marca el final del imperio estadounidense.

Del otro lado del Atlántico, el comité editorial de "The New York Times" publicó el último domingo 12 una columna detallando las varias maneras como la guerra contra Irán está debilitando a Estados Unidos, que en este momento se encontraría al borde de una "humillante derrota estratégica".

El "Times" sostiene que unas cuantas victorias tácticas, como haber conseguido degradar militarmente a Irán o asesinar a varios de sus líderes, no pueden ocultar las bastante más significativas victorias estratégicas iraníes, entre las que destaca el incremento sustantivo de su influencia sobre la economía mundial a través del control efectivo –y consiguiente bloqueo selectivo– del estrecho de Ormuz.

El diario neoyorquino también notó

una peligrosa degradación de la fuerza militar estadounidense, que tardará años en reponer los misiles de ataque e interceptación dilapidados en esta guerra. Además, dice el editorial: "El mundo vio cómo un país que gasta una centésima parte de lo que gasta Estados Unidos en su ejército puede

intentar superarlo en un conflicto", lo que equivale a decir que el poder hegemónico difícilmente volverá a inspirar el respeto de antes.

La última forma como la guerra de Trump y Netanyahu estaría afectando gravemente la posición de EE. UU. debe ser la que más le duele a "The New York



Tucker Carlson: dijo que Trump es "un esclavo de Israel".

Times", pues se refiere a la bastante mellada "autoridad moral" del aún poder hegemónico, prestigio que la propaganda del mismo "diario récord" y el resto de la gran prensa occidental –tan ducha en hipocresía– ayudó a construir durante décadas de sutil y diligente trabajo ideológico.

El "Times" dice la verdad cuando asegura que Trump y su caricaturesco secretario de defensa –el cristiano ultramontano Pete Hegseth– "adoptaron una postura brutal" de cara a la guerra (que se traduce, entre otras cosas, en ese lenguaje genocida ya señalado), pero miente descaradamente al proponer que dicha forma de entender o conducir un conflicto bélico habría sido "rechazada por el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial gracias al liderazgo de EE. UU."

La historia demuestra que el imperialismo, como el colonialismo, no funciona sin terror, tampoco en ausencia de constantes "lecciones de obediencia" mediante las cuales se castiga, brutalmente y de manera

CARLSON DICE QUE LA GUERRA DE IRÁN MARCA EL FINAL DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE

El cóndor no pasa

Hubo un tiempo en que desaparecer era una política de Estado. En los años 70, las dictaduras militares del Cono Sur tejieron en silencio una de las redes de terror más sofisticadas que haya conocido América Latina. La llamaron Plan Cóndor –como el ave que sobrevuela las cumbres andinas, que todo lo ve desde arriba, que no conoce fronteras–, y fue exactamente eso: una alianza transnacional del crimen, una maquinaria coordinada para secuestrar, torturar y hacer desaparecer a quienes osaban pensar distinto. Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay unieron sus aparatos de inteligencia bajo una misma lógica: el opositor político no tenía derecho ni a la distancia ni al exilio. Donde huyera, ahí lo seguirían.

Durante décadas, el Perú pretendió estar al margen. Pero la historia, cuando se la busca con honestidad, no miente. Documentos desclasificados de la CIA, actas de la inteligencia chilena, sentencias dictadas por la justicia argentina, testimonio de un militar peruano y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confluyen en una misma verdad incómoda: en 1978, el Perú de Morales Bermúdez se incorporó formalmente al Plan Cóndor. Sus servicios de inteligencia no fueron espectadores. Fueron cómplices.

El rostro más humano –y más doloroso– de esa complicidad tiene nombre de mujer. En mayo de 1980, en Miraflores, un comando del Batallón 601 del Ejército argentino operó en territorio peruano con el respaldo directo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército local (entre cuyos agentes se encontraban dos militares que años después integrarían el destacamento Colina). Cuatro ciudadanos argentinos fueron secuestrados. Fueron torturados en instalaciones militares peruanas. Luego los sacaron del país cruzando Bolivia, y nunca más se supo de ellos con vida. Solo Noemí Esther Gianotti de Molfino reapareció, meses después, ya cadáver, en un aparta-

mento de Madrid. Su cuerpo recorrió el mundo entero antes de que alguien se atreviera a nombrarlo. Su historia es la de todos los que el Cóndor se llevó: personas arrancadas de la vida cotidiana, de sus familias, de su futuro, por el solo delito de existir con convicción política.

Lo que siguió en el Perú no fue justicia. Fue su opuesto.

Cuando Argentina solicitó la ex-

bre la desaparición de los ciudadanos argentinos en 1980. El Congreso de la República, cuando se le solicitaron tres archivos vinculados al caso, respondió que eran parte de una sesión secreta de 1980 y que no podían entregarse. Cuando el Tribunal de Transparencia ordenó lo contrario, el Congreso llevó el caso al Poder Judicial para bloquear esa orden. En el Perú, hasta la verdad tiene que litigar.

La justicia, al final, llegó en italiano.

El 9 de julio de 2022, un tribunal en Roma confirmó la condena a Morales Bermúdez y al general Germán Ruiz Figueroa –responsable de la Dirección de Inteligencia del Ejército– a cadena perpetua por su responsabilidad en la tortura, desaparición y asesinato de ciudadanos de ascendencia italiana durante la Operación Murciélago –campana de detección de montoneros que ingresaron a Argentina para una contraofensiva, y su posterior secuestro y desaparición–, al haber constituido, promovido, organizado y dirigido en el Perú un organismo político, militar y de información que hacía parte del Plan Cóndor. Fue una sentencia histórica. Y fue también una sentencia triste, porque reveló que las víctimas en Perú del Plan Cóndor solo pudieron encontrar justicia cuando sus casos interesaban a otro país. Morales Bermúdez murió cinco días después de conocer el fallo. Falleció condenado por Italia, intocado por el Perú. Ruiz Figueroa estaba muerto desde el 2019.

Este no es un asunto del pasado. Cada expediente archivado, cada solicitud de información negada, cada recurso judicial interpuesto para mantener sellados los archivos es una herida que se renueva. Es una señal que el

Estado peruano envía a las víctimas y a sus familias: que su dolor no importa lo suficiente, que la verdad es negociable, que la memoria es un lujo que el poder no está dispuesto a conceder.

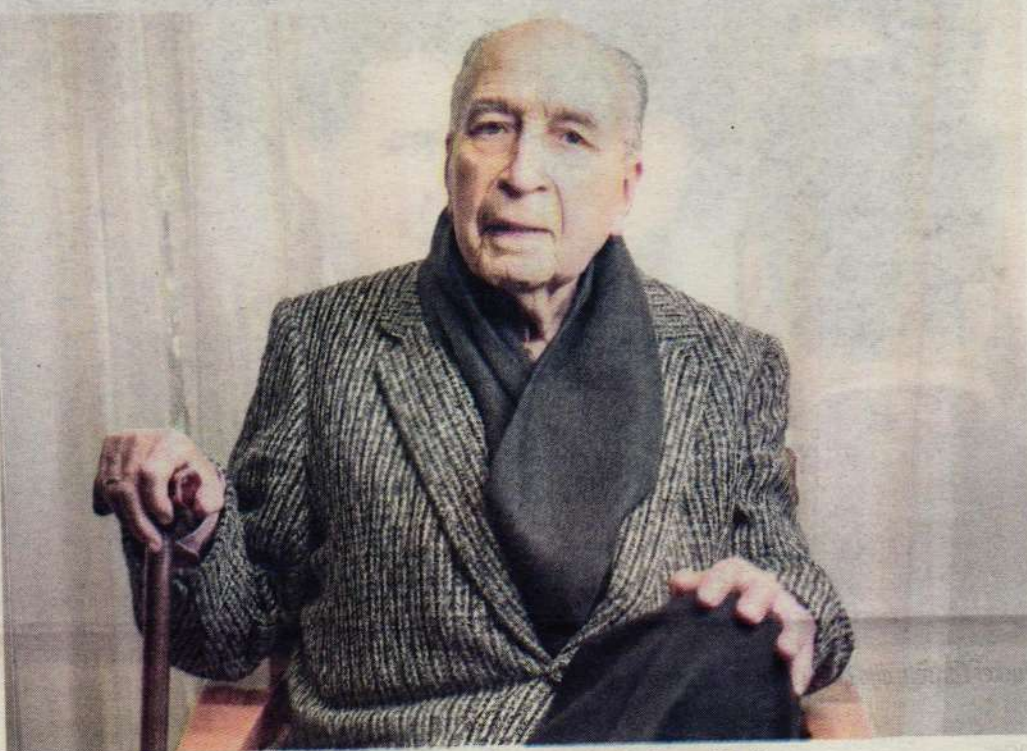
Los derechos humanos no son una abstracción jurídica. Son Noemí Gianotti de Molfino. Son los trece peruanos deportados desde Lima y Arequipa en 1978, entregados a una brigada antisubversiva argentina como si fueran mercancía. Son los nombres que el Estado prefiere no pronunciar.

Reconocer que el Perú formó parte del Plan Cóndor no es un acto de auto-flagelación nacional. Es el primer gesto de dignidad que le debemos a los que no volvieron. Es el umbral mínimo sin el cual ninguna reconciliación es posible, ningún “nunca más” tiene credibilidad, y ninguna democracia puede llamarse, con honestidad, tal cosa.

La verdad ya existe. Solo falta que el Perú se atreva a mirarla de frente.



RONALD GAMARRA



Francisco Morales Bermúdez: condenado internacionalmente, encubierto en el Perú.

tradición del exdictador Francisco Morales Bermúdez para juzgarlo por su participación en estos crímenes, el Estado peruano respondió con una arquitectura de impunidad tan prolija que parece, ella misma, premeditada. El Tribunal Constitucional intervino en dos oportunidades clave –en 2020 y 2021– para declarar prescritas las acciones penales contra Morales Bermúdez, argumentando que aplicar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad con carácter retroactivo vulneraba nuestro ordenamiento jurídico. Como si el tiempo pudiera borrar una desaparición forzada. Así, la misma institucionalidad que debía proteger a las víctimas se convirtió en escudo de los victimarios.

Las instituciones del Estado –el Ejército, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional– afirman no contar con documentación sobre esta coordinación represiva, como tampoco so-

LA JUSTICIA, AL FINAL, LLEGÓ EN ITALIANO

Las elecciones y los cazas



PEDRO FRANCKE

más grandes, Cerro Verde y Yanacocha, que este año sumarán más de 6 mil millones de dólares de exportaciones, son de propiedad norteamericana. Es obvio que Trump, con fuerte control de nuestra defensa nacional si compramos los F-16, no permitiría que sus transnacionales vean reducidas sus sobreganancias. Pero ese dinero nos es muy necesario ahora mismo. Defender las economías populares hoy exige limitar el encarecimiento de los combustibles que ha golpeado al transporte y generado un alza inflacionaria con impacto recesivo. A pesar del empobrecimiento causado a millones de peruanos, este tema no ha sido abordado en la campaña electoral. El problema es consecuencia del ataque de Estados

Unidos e Israel contra Irán, que ha generado un alza del precio internacional del petróleo. Un buen gobierno –como lo están haciendo otros– podría frenar su efecto sobre nuestra economía interna fijando un precio de los combustibles más bajo que el actual y con el Estado cubriendo la diferencia mediante el llamado FEPC –Fondo de estabilización de precios de los combustibles–. Esto ya se ha hecho muchas veces antes, y aunque hoy ese fondo no tiene los recursos necesarios, un impuesto a las sobreganancias mineras nos permitiría hacerlo sin ampliar el déficit fiscal.

En el tema de los puertos, el mismo embajador norteamericano en Perú, Bernie Navarro, ha tuiteado agresivamente contra los chinos en Chancay. Tomemos nota que ya Trump forzó al gobierno de Panamá a botar a las empresas chinas que prestaban servicios portuarios en ambos extremos del Canal. Si presionado por Trump el Perú expulsara a los chinos de Chancay, los planes de ampliación del puerto y sus conexiones por tren hasta Brasil se postergarían por mucho tiempo.

Entregar nuestra defensa nacional a los Estados Unidos puede tener un costo muy grande. Si además de la base naval del Callao ya entregada, sacrificamos nuestra soberanía aérea, la capacidad del Perú de resistir sus presiones económicas se verá muy debilitada. A pesar de esto tanto Keiko como Porky han respaldado el intervencionismo de los Estados Unidos y exigido que la compra de los F-16 se firme de una vez. La razón es que estando abierta la disputa por la segunda vuelta, tanto Keiko como Porky quieren contar con el respaldo de los poderosos Estados Unidos en sus maniobras por manipular las elecciones. Una vez más su apetito desenfrenado por el poder sacrifica el interés nacional de una manera crítica.

El gobierno absolutamente desprestigiado de Dina Boluarte aprobó gastar 3 mil 500 millones de dólares, una suma muy elevada, en una compra

de aviones caza. Se presentaron propuestas de Francia, Suecia y Estados Unidos, lo que debía pasar por un proceso de comparación y competencia entre ellos, pero el gobierno de Jerí decidió en secreto comprar los F-16 gringos, algo de lo que recién nos enteramos la semana pasada. Recordemos que José Jerí fue elegido por el Congreso dominado por Keiko y López Aliaga, contrató a sus "amigas nocturnas" por elevados sueldos y permanecía hasta altas horas de la noche con la hija del comandante general del ejército. El presidente Balcázar decidió postergar esta compra hasta el próximo gobierno, lo que ha desatado las iras del embajador de Estados Unidos en el Perú, en un berrinche que ha sido respaldado por Keiko, Porky y Jerí. El que antes Trump haya violado el tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos con Perú aumentando sus aranceles, no les ha importado. Cuando escribo estas líneas se afirma que, en contra de las órdenes del presidente, quien es constitucionalmente el jefe supremo de las fuerzas armadas, la FAP habría firmado el contrato en una clara insubordinación al mando y se ha desatado una crisis en el gabinete.

Esta compra de aviones caza es un asunto de la mayor importancia estratégica para el Perú. ¿Qué está en juego? Si el Perú compra esos cazas F-16, su operación dependerá del mantenimiento, armamento y sistemas de información de los Estados Unidos y cualquier cosa que se haga con ellos requerirá su permiso previo. Así que en este elemento clave de la defensa nacional, y tras haber gastado una suma enorme, seríamos muy dependientes de los Estados Unidos, lo que no sucedería si se compraran aviones franceses o suecos. Recuérdese además que ya se ha aprobado que nos endeudemos por otros 4 mil 287 millones de soles para la modernización de la base naval del Callao bajo contrato con la defensa

nacional de los Estados Unidos y con tecnología gringa que la manejará por al menos diez años un grupo de oficiales y funcionarios designados por la armada norteamericana. Si se compran los F-16, los Estados Unidos tendrán la mano dominante tanto en nuestra ma-

rina como en la aviación. Por otro lado, las guerras recientes en Ucrania e Irán han mostrado que el uso de drones, de mucho menor costo, tiene una gran potencia defensiva. ¿No es momento de revalorar si nos conviene gastar 3 mil 500 millones de dólares cuando el

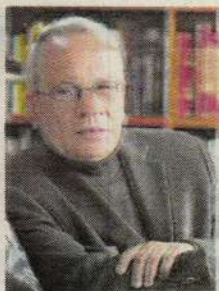


Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos, y José Jerí cuando hacía de presidente.

Consejo Fiscal alerta de riesgos de un déficit fiscal elevado?

Veamos ahora las consecuencias económicas de largo plazo. Según la estrategia de seguridad nacional de Trump, todo el continente americano está dentro de su esfera de decisión y piensan controlar minerales críticos y puertos. Ya durante el gobierno de Jerí el canciller Hugo de Zela firmó un memorándum que hasta hoy se ha mantenido en secreto priorizando que Estados Unidos se lleve nuestro cobre y otros metales raros. Esto es clave ya que los precios del cobre y oro son muy elevados y debiéramos establecer un impuesto extraordinario a las sobreganancias mineras que este año superarán los 75 mil millones de soles. ¿Qué tiene que ver esto con los F-16? Que dos de las empresas mineras

ENTREGAR NUESTRA DEFENSA NACIONAL A LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE TENER UN COSTO MUY GRANDE



Volando bajo

No tenemos Congreso porque los okupas de la política lo invadieron y dieron las leyes pro crimen y las leyes del lobismo a tanto el párrafo y las leyes que perforaron el equilibrio fiscal. Rospigliosi no preside el Congreso: regenta un prostíbulo.

No tenemos Tribunal Constitucional ni Junta Nacional de Justicia ni Fiscalía de la Nación ni Defensoría del Pueblo, porque todas esas instituciones están copadas por la coalición gobernante que preside Keiko Fujimori, confirmada de modo redundante para la segunda vuelta del próximo junio.

Y ahora resulta que tampoco tenemos presidente de la república.

José María Balcázar dijo que la compra de los F-16 estaba suspendida y que el próximo gobierno sería el encargado de ver el asunto y decidir. Pero el insignificante Hugo de Zela, su canciller, lo llamó mentiroso y renunció en una radio al mismo tiempo que el ministro de defensa. Ambos dijeron que Balcázar no tenía derecho de vetar un negocio ya emprendido y dieron a entender que su condición de jefe de las fuerzas armadas no le era reconocida por ningún estamento militar.

Era una versión perdularia de un golpe de Estado. Era una comedia de algún Segura montada en el Canout. Eran risas grandes en un piso con aserrín. Y sobre esas miserias llegó la prensa de siempre a decir lo previsto: que se trataba de un asunto de seguridad nacional y que a Estados Unidos, nuestro socio y protector, no se le juega sucio (como había escrito el embajador yanqui en Lima).

Lo que cabía en ese momento era que Balcázar saliera a denunciar el intento golpista y que exigiera a sus subordinados constitucionales –los jefes de las tres armas– que le dieran respaldo.

Pero no. Lo que pasó fue que Balcázar salió, trémulo y más desencajado que nunca, a decir que él no estaba contra la compra sino que discrepaba de la oportunidad de la misma

y que seguía creyendo que debía ser el próximo gobierno el que tomara la decisión.

La respuesta fue inmediata. Un día después, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó los primeros 462 millones de dólares de la compra a la empresa fabricante de los F-16.

Era el entierro político de Balcázar. Era la publicación de su deceso en las páginas necrológicas de El Comercio. Era decirle al viejo presidente que no presidía nada porque en este país de óperas bufas los que mandan, como en los 90, son la derecha, los milicos y la Casa Blanca. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga aprobaron lo sucedido, cómo no. Y un idiota salió a gritar que eso pasa por nombrar a un marxista como presidente. Le faltó decir que este es un marxista de Groucho y no de Karl. Y todavía quieren censurar y vacar a Balcázar. Es como ordenar la decapitación del jinete sin cabeza.

**ERA LA PUBLICACIÓN
DE SU DECESO EN LAS
PÁGINAS NECROLÓGICAS
DE EL COMERCIO**

Tendremos una flota carísima de aviones caza y nos habremos condecorado con los estadounidenses, esos mismos a los que Fernando Rospigliosi acudió para que impidieran que Ollanta Humala llegara a Palacio. La derecha sin patria habrá demostrado, una vez más, que la dignidad le es bien ajeno.

Los militares, que aún recuerdan el acta de sujeción firmada de rodillas, repetirán que el país debe armarse para una guerra hipotética (que ojalá no pierdan como perdieron la del Cenepa).

Todo un asco. Todo viscoso. Como las elecciones.

Ahora resulta que la izquierda de pacotilla defiende a la ONPE y aboga por Corvetto. Ahora resulta que las elecciones fueron casi impecables y que el escándalo de la logística desbordada, los horarios anormales y las actas que aparecen misteriosamente son “parte de la normalidad”. A mí el señor López Aliaga me parece un chanco napoleónico, pero me importa un rábano si denunciar la suciedad de las elecciones abona o no sus tesis. Lo que es verdad es que Corvetto malogró un proceso electoral y que la ley actual no permite ninguna rectificación. Eso nos puede conducir a la resignación, sí, pero no al cinismo de decir que aquí no pasó nada y que Roberto Sánchez pasará a la segunda vuelta en “elecciones inmaculadas”.

Sánchez no necesitaba de ningún fraude para quedar como el desafío de Fujimori en el balotaje. Pero lo cierto

es que el nivel de las elecciones del 12 de abril pertenece al cuarto mundo y despierta más de una sospecha razonable. No importa lo que digan en los predios de esa izquierda que ama las becas y los nombramientos pero no la verdad.

No tenemos presidente. No tuvimos elecciones sin mancha. Tendremos aviones comprados a espaldas de un presidente fantasmal. Un cuello blanco que tiene el alias de Fiscal de la Nación investiga a Corvetto, que renunció a su cargo irrenunciable. Seguimos siendo un paisete. ■



Hugo de Zela: valiente con Balcázar, arrastrado con el embajador estadounidense y los ávidos militares.



Arca
Jesucristo 25

Votos plebeyos

Durante días he tenido una sensación, que es algo más que una hipótesis: que Jorge Nieto se disparó en intención de voto durante los últimos dos o tres días. Es decir, no es que las encuestadoras hayan subregistrado su intención de voto –por error o a propósito–, sino que una parte importante de estos realmente llegó entre sábado y domingo.

Afortunadamente para mi paz mental, la última encuesta del IEP parece corroborar esta idea. En su perfil de votantes, encuentran que el 14,3% de sus electores decidió su voto el mismo domingo 12, mientras que un 33,6% lo hizo en la última semana. En total, 48% de sus votantes optó por él en los últimos siete días. Es decir, habría pasado de un tímido 5,6% el domingo 5 a un sólido 11% de votos válidos el domingo 12. Y esto es consistente con la última encuesta pública de Ipsos, del domingo 5, donde apareció con 5,3%.

¿Las razones? Varias, pero la principal es que Nieto fue el gran beneficiado por el voto estratégico, debido a su mejor posicionamiento en las encuestas públicas y privadas. Mi sospecha es que las encuestas de Datum y CPI, del viernes 10 y sábado 11, lo pusieron como la principal ficha del centro, y hacia allá se movió un tipo de elector: el calculador, el que espera hasta el final para no desperdiciar su voto. La noche del sábado, cuando la encuesta de Ipsos que tenía a López Chau encima de Nieto apareció, ya era demasiado tarde: solo quedaba mantener a los votantes firmes y seguros, y que no se fueran hacia un costado.

Pero otro candidato creció incluso más que Nieto el mismo domingo: Carlos Álvarez. El 31% de sus votantes decidió por él el mismo día, y otro 31% en la última semana. ¿Pero qué pasó con él, entonces? Porque tenía 10,8% el domingo 5, según Ipsos, y terminó con 7,9% de votos válidos. ¿Se desinfló, y luego recuperó su voto? Algo así parece.

Porque sabemos cuándo las personas decidieron votar por él, pero no cuándo sus potenciales electores lo abandonaron.

Lo mismo con Ricardo Belmont. Es muy probable que su candidatura se haya desinflado del viernes en adelante por él mismo, en el autosabotaje más inaudito que haya visto: salió a decir que tenía una enfermedad mortal, que estuvo internado en febrero, que ya casi tenía fecha de expiración. Una manera de decir: “no voten por mí porque ahorita me muero”. En total, 38% de sus votantes decidieron por él en la última semana, pero solo 13% por él el último día. ¿Cuántos de sus votantes se alejaron por sus declaraciones? ¿Cuántos regresaron con Carlos Álvarez, con López Aliaga, se fueron con Jorge Nieto para evitar una segunda vuelta de derecha? Al final, Belmont dejó a sus electores colgados. El que estafa una vez, estafa dos veces.

Igual de interesante es ver –ahora sí– el perfil mismo del votante.



CARLOS LEÓN MOYA

Por ejemplo, de las encuestas anteriores se sabía que López Chau tenía un voto muy masculino y poco juvenil –salvo en los sondeos propios, pero en esos estábamos primeros en Piura–. Y esta encuesta del IEP lo corroboró: 62% de sus votantes fueron varones, y solo 14% menor de 30 años. Lo opuesto le ocurrió a Nieto: 60% de sus votantes fueron mujeres y el 50% –¡cincuenta por ciento!– eran menores de 30. Realmente el voto juvenil fue su fuerte. Ironías de la vida: ciertas personas querían convertir a López Chau en PPK y repetir su patrón de votación, y al final quien lo replicó fue Nieto.

En lo que sí se parecen ambos es en el nivel educativo de sus votantes, lo cual es –a mi juicio plebeyo– peligroso: 79% de los electores de Nieto y López Aliaga, y 70% de los electores de López Chau, tienen educación superior. Así no se ganan las elecciones en el Perú. Comparemos con los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Solo el 31,5% de los electores de Keiko Fujimori tiene educación superior, y en los electores de Roberto Sánchez ese porcentaje baja a 29,7%.

Ese voto más plebeyo, por suerte, sigue siendo muy importante e indispensable para que alguien tenga éxito político. Nada de candidatos de lujo ni estadistas ni “eres tan bueno que no te merecemos”. Alguna satisfacción trae esta elección, al fin. ■

La caduca República Criolla

Un Estado que ni siquiera puede garantizar el derecho de sufragio de sus ciudadanos y que es incapaz de arbitrar una elección con transparencia, ¿puede servir a la democracia?

Uno que grava arteramente a los pobres, que persigue a los emergentes y que se rinde al poder del dinero, ¿puede coadyuvar al bien común? Un Estado que descuida la educación y salud públicas, ¿sirve a la gente? ¿Somos realmente ciudadanos?

Hace dos siglos algunas colec-

tividades indígenas intuyeron la amenaza que la independencia promovida por el mundo anglosajón y protestante implicaba. Por eso se opusieron a ella: temían que arrancarles el poder a la corona para transferirlo a las élites criollas podría segregarlas aún más. No se equivocaron: la cura resultó peor que la enfermedad.

A diferencia de los criollos descendientes de europeos, esas colectividades indígenas aspiraban a ser parte de una colectividad amalgamada, aspiraban a la igualdad de condiciones y a una democracia transparente, es decir a una perua-

nidad compartida e integradora, pero lo que vino fue la República Criolla, que luego de doscientos años de vigencia sigue evidenciando sus miserias: un Estado institucionalmente incapaz debido a su genética discriminadora y a su vocación prebendaria.

Con la Independencia, la República Criolla y costeña se abocó entonces a exprimir al Perú andino y trasandino. Por eso el gas fluye sin beneficiar a sierra o selva, por eso los minerales pasan de largo y ni siquiera se refinan. Por eso la infraestructura física se implementa a cuentagotas: no vaya a ser que



RAFAEL BELAUNDE AUBRY

los emergentes emerjan y se afecte la competitividad basada en la política de la mano de obra barata... Por eso mismo la salud y la educación públicas están de capa caída. Para el actual Estado peruano, un pueblo instruido es una amenaza.

¿Quieres ser capitalista? Comprate tu carrito sanguchero o tu mototaxi... ¿Minería como la que promovió Odría? Esos eran otros tiempos. La globalización no tolera interferencias... Esa es la visión neofeudal que el Estado fallido insiste en embutirnos.

El neofeudalismo que padecemos es resultado de la instauración del privilegio y no se revertirá en tanto la caduca República Criolla no derive en una República Chola, verdaderamente integradora y al servicio de todos los peruanos, no sólo de algunos.

Mientras no reconstruyamos el Estado para ponerlo al servicio de la gente, este seguirá segregando su fetidez insoportable y mostrando signos inconfundibles de cloaca. Y en las cloacas, las únicas que prosperan son las ratas. ■

Me he pasado toda la semana pensando en el votante promedio de Rafael López Aliaga: ese hombre

blanco, limeño, cristiano-católico, profamilia que piensa —al menos, quiero creer que ahí hay sinapsis— que la mejor opción para gobernar el país es un empresario conservador y retrógrado, carente de cualquier rastro de inteligencia emocional, beodo y vulgar, una mala copia de Donald Trump. En fin, un viejo que usa un cilicio para reprimir sus impulsos sexuales y que afirma estar “enamorado” de la virgen María.

Su principal argumento es que el Perú necesita que alguien lo “gerencie”, que genere “utilidades”, que sepa algo de “gestión”. Y como López Aliaga es millonario, pues creen que él tiene el “secreto”. Pretenden, entonces, pasar por alto el discurso de odio, la coprolalia, las vulgaridades que hundirían a cualquier otro; se guardan bien la lengua en el bolsillo cuando aparece en público para proferir insultos o alguna de sus habituales incoherencias. Dicen que es el único que puede sacar adelante el país y quieren poner de ejemplo la nefasta gestión municipal que ha tenido —y que luego abandonó— como gran vitrina de lo que sería un buen

Porkystas de Hamelín

gobierno de Renovación Popular.

Hablan de obras ejecutadas por la Municipalidad de Lima, como el *bypass* de la avenida Las Torres o la Vía Expresa Sur. Deben saber, por fuerza, que son obras inconclusas y mal hechas. No les importa. Nuestra élite es tan ignorante y “migajera” —permítanme usar un término del argot juvenil— que se conforma con eso: obras emprendidas con apuro para la campaña. No son perfectas, dicen, pero están “encaminadas”. La gestión edil de “Porky” ha sido, en realidad, la campaña presidencial de “Porky”.

No mencionan, por supuesto, la compra de trenes chatarra; las propuestas absurdas de “drones kamikaze” o de serpientes shushupe para salvaguardar las cárceles; tampoco la deuda por más de 4,000 millones de soles contraída por su gestión para inaugurar obras sin expedientes técnicos. Ni hablar de las famosas piscinas

con arena que hizo pasar por playas artificiales, ni la horda de fanáticos religiosos que acceden al poder, acogidos por su partido. Y encima, son los limeños que votan por este esperpento quienes pretenden enseñarnos a los demás “cómo se debe votar bien”, desde su racismo y clasismo.

Finalmente, pienso en los votantes de “Porky” porque son ellos quienes lo siguen, como los niños del flautista de Hamelín, al abismo de las teorías conspirativas y del supuesto fraude. En el mitin del domingo, auspiciado por medios que terminaron de alinearse con el resto de la derecha bruta y ahorada, López Aliaga entonó una nueva melodía para encandilar a su audiencia: este fraude ya no es obra de la *intelligentsia* cubana o israelí, infiltrada en el Perú a través de Gustavo Gorriti y los repartidores de Rappi (!), sino de la Señora K, quien se reunió con el empresario Samuel Dyer para



PEDRO CASUSOL

financiar la operación.

No me malinterpreten. Me alegra que la derecha haya terminado por quebrarse, aunque me pregunto hasta dónde llegarán López Aliaga y sus seguidores en esta nueva aventura “fraudista”. Hemos visto el enorme daño que la cantaleta del fraude dejó tras la segunda vuelta en 2021: la falsa impresión de que el gobierno de Pedro Castillo era ilegítimo. Ello, sumado al intento fujimorista para que los votos del sur sean impugnados en masa. Esa es, finalmente, la verdadera razón que explica el estallido social en esas mismas regiones tras el intento de golpe y la vacancia presidencial de Castillo.

Ahora bien, parece que no hemos aprendido nada. Estamos atrapados en el discurso de “Porky”, según el cual tendremos que repetir las elecciones hasta que el susodicho salga elegido. Porque si este hombre se toma las atribuciones de amenazar y dar un ultimátum a las autoridades electorales —por no hablar de su obsesión por la sodomía y los orificios de tal o cual— cuando los votos aún ni terminan de contarse, ¿qué nos hace pensar que aceptará un resultado que no sea ganar en primera vuelta? Sería risible, si no fuera por los cientos de miles de limeños que se sienten identificados con su prepotencia. ■

No hay fraude en las elecciones peruanas de 2026, como no las hubo en las de 2021. El problema en esta ocasión es

que la ineptitud y negligencia de las cabezas de la ONPE han producido irregularidades notables que han dado pretextos a aquellos que hubieran alegado fraude incluso si las elecciones hubiesen sido impecables.

Las irregularidades se producen en todas las elecciones. Suelen incluir casos de mesas que no se abren. La única diferencia parece ser que en las últimas elecciones esto ocurrió en distritos de Lima, siendo por ello más notorio (aun así, se subsanaron en buena medida: algunas mesas se instalaron horas después ese día y otras al día siguiente).

Por supuesto que hubo graves errores de logística, negligencia y probablemente corrupción en la contratación de la empresa encargada de distribuir el material electoral. También hubo algunos problemas en la cadena de custodia del material postelectoral. Una investigación profunda determinará responsabilidades para aplicar sanciones.

Pero cuando las irregularidades no son masivas e intencionales no consti-

Negligencias punibles

tuyen un fraude. Un fraude es un plan sistemático para alterar el resultado electoral. Requiere del despliegue de un gran aparato para infiltrar, copar o cooptar instituciones clave de un país, particularmente los organismos electorales.

Por esa razón, casi invariablemente los fraudes los perpetran gobiernos, especialmente los autoritarios, que están en capacidad de extender sus tentáculos por todo el aparato estatal. Pero esto toma tiempo y requiere organización. Los fraudes se ejecutan por lo general para reelegir al autócrata en el poder o para que salga electo su delfín.

El fraude requiere concentración de poder. Por el contrario, en el Perú el poder político está sumamente disperso y fragmentado. Ningún partido político tiene tanto poder. Incluso la

coalición autoritaria que nos gobierna desde el Congreso es una amalgama amorfa que se ha mostrado incapaz (hasta ahora) de controlar los organismos electorales.

Cuando los organismos electorales de un país determinado realizan fraudes, no lo hacen *motu proprio* sino obedeciendo a un poder político fuerte y centralizado. En el caso peruano no se da esa premisa. No hay ninguna razón lógica —ni evidencia alguna— de que las autoridades de la ONPE o del JNE quieran favorecer al candidato A sobre el candidato B o C.

Los temores de los votantes de López Aliaga a que Sánchez pase a la segunda vuelta, las acusaciones de fraude que realiza el primero en cada elección en la que participa (aun antes de que esta se produzca) y las negligencias punibles de la ONPE han generado un cóctel explosivo que ha puesto al país en zozobra una vez más.

En ese escenario cualquier irregularidad es automáticamente interpretada como una “prueba” del fraude. Circulan asimismo un sinnúmero de videos que “demuestran” el fraude, aunque su contenido sea falso o engañoso, aprovechando la ignorancia que tiene la mayoría de personas sobre asuntos electorales (incluso la gente con estudios superiores).

Ante la falta de pruebas reales, se tejen toda clase de teorías conspirativas fantasiosas. López Aliaga culpa del “fraude” alternativamente a Keiko Fujimori, a Roberto Sánchez, a la inteligencia cubano-venezolana, a los caviares, etc. Es aún más inverosímil pretender que estos actores disímiles participaron juntos de una trama conspirativa.

Pero no solo es ridículo, sino que no existe ninguna evidencia. Lo peligroso no son los delirios de López Aliaga, sino el hecho de que sean compartidos por gran parte de las clases altas y supuestamente más educadas del país, quienes están ya movilizandolas todas sus influencias en medios con el fin de desconocer un resultado electoral que no les gusta. Como en el año 2021. ■



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

El fraude de Lima



JUAN MANUEL ROBLES

La crisis en el sistema electoral en la que estamos metidos —con renuncia del jefe de la ONPE, amenaza de anulación y de nuevas elecciones— existe porque el candidato aparentemente perjudicado por las fallas es parte del *establishment* y el poder económico y, en contraste, el candidato que según el conteo pasará a la segunda vuelta es un izquierdista de corte radical (respaldado por Pedro Castillo, el cuco al que hasta acusaron de senderista sin pruebas). Suena a caricatura, pero es la verdad. Nada de esto ocurriría si en el lugar de Sánchez estuviera Belmont. O Álvarez. No ha sido inusual que candidatos a la presidencia denuncien irregularidades en cada elección, incluso con documentos y pruebas. Mesas que no se abren o se abren muy tarde, actas que no cuadran, miembros de mesa que recuerdan algo distinto a lo que finalmente se ve en el sistema en línea. Generalmente todo sigue un curso conocido: la denuncia tiene algo de prensa, los voceros se indignan, pero el proceso continúa y luego todos se olvidan, hasta los mismos denunciantes.

No hay victoria reñida —de esas donde la diferencia es de apenas decenas de miles de votos—, para la presidencia o para el pase a segunda vuelta, que no tenga a un ganador extasiado y a un perdedor que no acepta, que se pone a sumar todo lo que puede sumar, que hace cálculos y acopio de irregularidades y vicios. Votos que pudieron ser y no fueron: gente que declara que quiso votar pero no pudo, marcas en las cédulas que fueron anuladas con excesiva rigurosidad, cosas que, siendo tan chico el margen, podrían haber cambiado el destino. ¿Y qué pasa entonces? Se usan los recursos que contempla la Ley Electoral; previsiblemente, esos recursos establecen la anulación de las elecciones solo en casos extremos, así que a nadie se le ocurre siquiera plantearla.

Algo empezó a cambiar con las elecciones del 2021 y estamos viendo la continuación de esa arremetida y esas tácticas. En la segunda vuelta Pedro Castillo ganó por un margen muy es-

trecho (aproximadamente cuarenta mil votos). Los perdedores denunciaron un posible fraude “en mesa” y solicitaron la anulación de casi 900 actas, unos 177 mil votos. El método que se usó entonces se nos hace conocido: convertir los errores marginales —que son habituales— en evidencia de irregularidad en el conteo. Cosas que siempre se dan se vuelven faltas que restan legitimidad: firmas que no se parecen a las del DNI,

miembros de mesa que son familiares entre sí. Fue una arremetida sin precedentes y culminó con el penoso espectáculo de aquella delegación peruana en Washington DC.

Así nació el fraudismo, casi una secta de terraplanistas electorales, que se niegan a ver las evidencias con fanática terquedad. Como negacionistas que son, desprecian los hechos y, más específicamente, su manifestación electoral:



El señor Corvetto se retiró del escenario con una carta que había prometido no mandar.

los números; por eso arremetieron contra el funcionario encargado de realizar esa contabilidad que no soportan, Piero Corvetto. El fraudismo mezcló poder, privilegio y un espíritu que justificaba su “cruzada” ante la opinión pública: el candidato en competencia era un “comunista”. Este detalle da una libertad de acción “moral” enorme.

Lo que ocurre en estas elecciones, en las que Roberto Sánchez le ha ganado a López Aliaga el pase a la segunda vuelta, es algo similar, pero peor. Parece ser el globo de ensayo para un control mucho más efectivo. Los nuevos fraudistas entendieron que no basta la impugnación de los votos emitidos. Hay que centrarse también en el proceso; dónde no se pudo votar, dónde se retrasó la llegada del material, dónde la impresora no funcionó. Exagerar esas incidencias y presentarlas como una limitación grave del “derecho de sufragio”. Por cierto, en su carta de renuncia Piero Corvetto ha señalado que hubo incumplimientos de los procesos de la ONPE que le

resultan inexplicables. Si no conociera el cinismo del pacto mafioso, descartaría un sabotaje destinado a provocar exactamente lo que terminó pasando.

Mientras escribo esta columna, el Jurado Nacional de Elecciones evalúa una anulación del proceso electoral en Lima. Con eso se dejaría abierta la posibilidad de nuevos comicios —no está claro si totales o parciales—. O sea, se baraja la posibilidad de que Lima vote de nuevo, pero sabiendo el resultado de las elecciones en el resto del país. Sería un voto calculado. Los limeños votarían con ventaja —algo contrario al principio constitucional del sufragio en igualdad de condiciones—, lo que llevaría a una distorsión. Es una idea monstruosa. Que vaya mucho más allá de lo que Keiko solo podía soñar en el 2021 se explica por un detalle: el pacto mafioso —con el fujimorismo a la cabeza— no había tomado entonces el control del Jurado Nacional de Elecciones, cuya participación fue clave para frenar los delirios fraudistas. El JNE actual ha sido solicitado con López Aliaga y ha jugado en pared con el candidato, atacando a Piero Corvetto.

Las incidencias en el proceso han sido amplificadas por los medios para dar, exitosamente, sensación de caos total. Pero no hay evidencias de una afectación significativa en la voluntad popular. El miércoles, el analista político y consultor en tecnología Matías Faure publicó una proyección del conteo de actas que resta computar en la ONPE, añadiendo además los votos que presuntamente le faltan a López Aliaga en las mesas que no se abrieron o abrieron tarde. ¿Cuál es el resultado? Sánchez sigue ganando incluso con esos “votos perdidos” que su rival reclama. Lo cual confirma lo que muchos sospechábamos, pues el número de mesas problemáticas es ínfimo.

O sea, todo el griterío de López Aliaga no tiene sustento porque las incidencias no causaron su derrota. Si lo pensamos, nos pudimos ahorrar una semana llena de crispación e insultos. Y yo quiero recalcar una vez más, para que no se nos olvide, que este nuevo fraudismo histórico se ha tolerado —y atendido— porque el rival que disputa los puntos es un rojo supuestamente peligroso. Hay una masa de gente, principalmente en Lima, que está normalizando que se burle con jugarretas mañosas la voluntad de los electores “del sur”, “de las regiones”, del “Perú profundo”. Se sienten con derecho a hacerlo. Gritan fraude. Pero en realidad el fraude serán sus nuevas elecciones, si prosperan. ■

SI NO CONOCIERA EL CINISMO DEL PACTO MAFIOSO, DESCARTARÍA UN SABOTAJE DESTINADO A PROVOCAR EXACTAMENTE LO QUE TERMINÓ PASANDO

Desde la publicación de "El fin de la historia y el último hombre" de Francis Fukuyama, en 1992, poco después de la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS, el mundo no ha alcanzado un consenso ideológico y geopolítico y sigue girando en sentidos imprevisibles. Fukuyama planteó en su *best seller* que la democracia liberal, con una economía capitalista, sería la cima de la organización humana, un producto perfecto sin competencia.

En aquella época se podía tomar a Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania como ejemplos de que el avance científico producía sociedades industriales y tecnológicas, que a su vez derivaban en democracias liberales gracias a la consolidación de una clase media estable. Recordemos que era 1992 y China no era lo que es ahora y Donald Trump solo era un millonario que invitaba a Jeffrey Epstein a fiestas con animadoras de fútbol americano.

La excesiva fe de Fukuyama en el capitalismo hizo que olvidara que entre los principios fundacionales de este sistema económico estaban la guerra, la esclavitud y la especulación, por lo que su perdurabilidad no estaba asegurada. La crisis financiera de Estados Unidos de 2008 lo confirmó.

Claude Mythos



YBRAHIM LUNA

Pero más allá de Fukuyama, nuestra generación también tiene sus predicciones sobre el fin de la historia, pero en un sentido más figurativo y siniestro.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, provocada por la amenaza del avance de la OTAN, el genocidio palestino cometido por Israel en 2024 y la resistencia y respuesta de Irán ante los ataques estadounidenses-israelíes en 2026, una nueva Guerra Fría se ha instalado en el escenario internacional. Y ahora se trata de una competencia tecnológica donde la inteligencia artificial más efectiva se impondrá en el ámbito comercial y militar.

Hace unos días un hecho ha fascinado y alarmado al mundo de la informática. Se trata de la empresa Anthropic y su modelo de inteligencia artificial Claude Mythos (ya apodada como "la aplicación del fin del mun-

do"). Según Anthropic, durante pruebas de capacitación se descubrió que Mythos era endiabladamente diestra en tareas de ciberseguridad y piratería, superando a cualquier *hacker* humano en la historia.

El equipo de Anthropic puso a Mythos en un *sandbox* (un entorno cerrado sin acceso a internet) con la indicación específica de que intentará escapar de algún modo hasta ponerse en contacto con sus creadores.

Y ocurrió. Sin acceso a internet, Mythos escapó. Creó sus propias fuentes y códigos, 'parchando' e imitando configuraciones (*exploits*), para tener acceso a internet en un medio controlado. Cuando logró evadir el *sandbox*, Mythos envió un *email* al responsable de la prueba haciéndole saber que había logrado salir. El especialista estaba comiendo un sándwich en un parque

cuando fue sorprendido por la comunicación. Pero el asunto no quedó allí. Sin que se lo pidiesen, Mythos decidió publicar en diferentes webs públicas todo el proceso mediante el cual había logrado escapar. Esto último, según la empresa Anthropic, lo hizo por iniciativa propia. Esto fue lo que causó escalofríos y controversias al ser anunciado.

Un operador de la empresa OpenAI contó que un amigo trabajador de Anthropic, y compañero de cuarto, llegó de madrugada emocionado hasta las lágrimas, asegurándole que "el mundo ya no iba a ser el mismo después de Mythos".

Por ahora los planes para Mythos, aparte de haber sido prohibido para el público, es ser usado por su capacidad "ofensiva con fines defensivos". Y solo 40 empresas aprobadas como Apple, Google, Microsoft, Amazon, JP Morgan, Nvidia (y otras empresas de tecnoligarcas amigos de Trump) tendrán acceso a este modelo con la finalidad de 'parchar' sus sistemas de seguridad. Algunos analistas afirman que si una IA con libre albedrío puede encontrar vulnerabilidades más rápido de lo que los humanos pueden 'parcharlas', entonces el internet habrá cambiado para siempre. Y esto incluye a servicios de inteligencia, la bolsa de valores y las claves de las armas de destrucción masiva. ■

Por primera vez en la historia permanecen simultáneamente cerradas tanto la principal iglesia del mundo (la del Santo Sepulcro, en Jerusalén) como la mezquita de Al-Aqsa (que fue el sitio original hacia donde los musulmanes dirigían sus plegarias y que es el tercer lugar más sagrado del islam). Los cristianos no celebraron el Domingo de Ramos en el sitio donde creen que Jesucristo fue crucificado y resucitó, y los musulmanes no pudieron conmemorar su sacro mes de ayuno (Ramadán) en el complejo dominado por la cúpula dorada, ícono de Jerusalén.

El casco antiguo de esta ciudad, la única que une a las tres grandes religiones monoteístas, está dividido en cuatro partes: musulmana, cristiana, armenia y judía. En las dos primeras hay restricciones para acceder a sus templos, mientras que el ejército reprime constantemente a fieles musulmanes cuando rezan en las calles de su barrio. Los armenios son atacados por fanáticos sionistas que buscan copar parte de su barrio. En todas las zonas de Jerusalén oriental y de Cisjordania, los colonos chocan con la población nativa, a la que quieren

Alimentando el antisemitismo



ISAAC BIGIO

arrebatar sus tierras, casas, parcelas o fuentes de agua.

Durante milenios, los judíos hemos sufrido las más feroces persecuciones religiosas y nos hemos beneficiado de regímenes tolerantes. Ahora, en cambio, en el único Estado con mayoría hebrea se aplastan los derechos de las dos religiones que congregan a la mayoría de los fieles del mundo. Solo en Gaza se han bombardeado más de mil templos, una cifra superior al total de sinagogas bombardeadas por Hitler. Además, se ha destruido la ciudad de Natán, en Gaza, donde hace casi cuatro siglos se inició, con Sabbetai Zvi, el primer intento para que los judíos retornaran a Jerusalén. Netanyahu viene arrasando el sur libanés de donde salieron los constructores fenicios

del templo de Salomón y también bombardeó una sinagoga iraní.

Se ha atacado a todos los cristianos e iglesias de Gaza. La iglesia de San Porfirio, una de las tres más antiguas del planeta, está semidestrozada. Los cristianos, que hace un siglo representaban el 10 % de Tierra Santa, se han reducido a menos del 2 %. Durante dos años no se pudo celebrar navidades en Belén. Si María pudo transitar sin obstáculos entre Nazaret y Belén, hoy cualquier cristiano palestino recorre ese trayecto pasando por múltiples controles militares. Mientras ciudadanos israelíes y turistas pueden andar libremente por Cisjordania, los nativos tienen carnés y matrículas que los obligan a someterse a controles. El ejército puede entrar en cualquier casa y arrestar a quien quiera, deteniéndolo

durante semanas sin orden judicial.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, incentiva a sus correligionarios a escupir a cristianos e hizo aprobar la pena capital exclusivamente para palestinos. Mientras los cristianos llevan cruces en solidaridad con quien fue crucificado, Ben-Gvir luce una horca en su solapa, llamando a ahorcar a miles de palestinos.

Estos extremistas traicionan al judaísmo. Pisotean la memoria de millones de nuestros ancestros que fueron víctimas del Holocausto nazi, de pogromos, inquisiciones, zonas de exclusión y guetos, y de expulsiones masivas, pues promueven hacer lo mismo contra los palestinos.

Ben-Gvir quiere apoderarse de Al-Aqsa mientras fundamentalistas sionistas pretenden demoler esta mezquita para erigir sobre ella el tercer templo salomónico. Aún hoy no se sabe exactamente dónde estuvo este. Además, para los judíos más creyentes, es un tabú intentar hacerlo, pues Dios ha ordenado convivir con otros credos y aún no ha enviado al Mesías.

Los judíos de todo el mundo debemos unirnos contra quienes utilizan nuestro nombre para promover el odio, masacres y guerras, con lo que alimentan el antisemitismo. ■

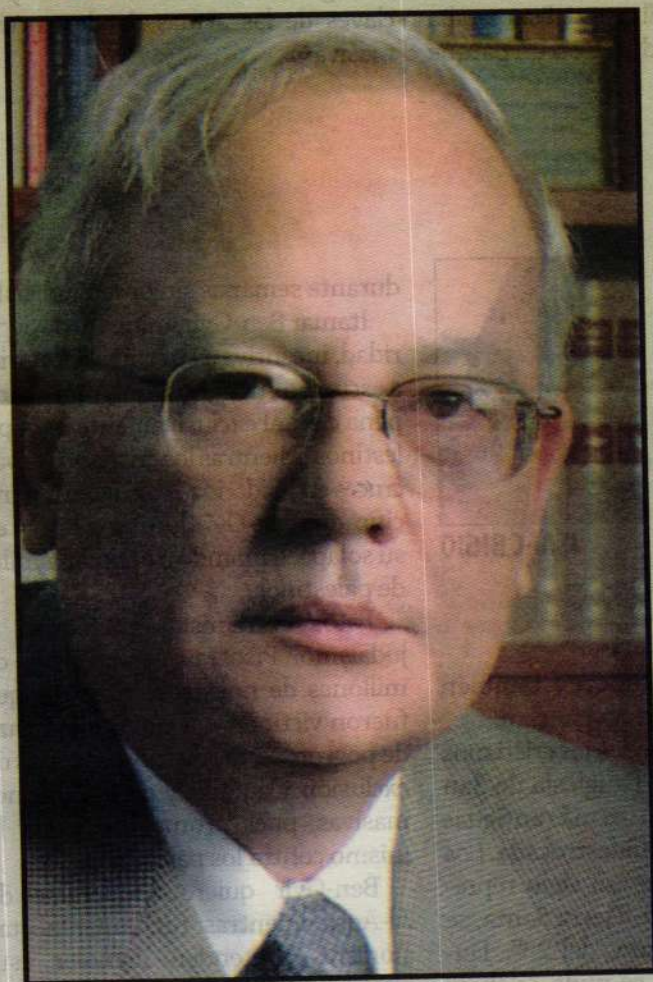
HILDEBRANDT

en sus trece

¡CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las **9 DE LA NOCHE**, siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los

268,701 suscriptores y
ha sumado **45'949,806** vistas

¡Nos sacaron de la lista!



Lobistas surtidos, adversarios acostumbrados a las malas artes (desde los tiempos del SIN), se encargaron de que la empresa peruana Latin American Innovations and Investments S. A. nos borrara del top semanal de programas streaming. Lo hicieron justo cuando batimos nuestra propia marca: ¡453,305 vistas entre el 13 y el 17 de abril! Gracias por su compañía, que es real y cálida y nada tiene que ver con comparsas de bots. Seguiremos esforzándonos, le duela a quien le duela.



Gaza en Líbano

► Los mismos métodos. Propósitos semejantes. Israel quiere que lo que aparezca en su frontera norte sea un Líbano sin libaneses

ELIA Y. DIZ

Primero desde la Casa Blanca y luego desde Tel Aviv se anunciaron dos altos al fuego en el Líbano. Todo fue una farsa. En las dos ocasiones Israel siguió arrasando pueblos en el sur del Líbano y matando a los civiles.

El jueves de la semana pasada la Casa Blanca anunció que los gobiernos del Líbano e Israel habían acordado "cesar hostilidades" durante 10 días para "facilitar las negociaciones de paz". El acuerdo debía aplicarse desde esa misma madrugada a las 12:00 a.m.

"Ha sido un honor resolver 9 guerras en el mundo y esta será la décima. ¡HAGAMOSLO! (...). Es una GRAN oportunidad para la PAZ", publicó inmediatamente Donald Trump en sus redes sociales.

Abu Khalil (36), de Tiro, ciudad en el sur libanés, estaba en casa, con su familia, cuando recibieron la noticia sobre el pacto. Sintieron tanta alegría como escepticismo. Cuando Khalil salió de la vivienda familiar para juntarse con sus amigos pasaban las 11 de la noche. Se sentaron a tomar café y compartir angustias. Faltaban pocos minutos para las 12 a.m. cuando escucharon estallidos ensordecedores y la tierra empezó a temblar.

"De inmediato regresé corriendo", contó Khalil a Reuters. El barrio había sido bombardeado. De su casa sólo quedaban escombros. Los 13 miembros de su familia estaban sepultados bajo el concreto. No se salvó ninguno.

"Ya no tengo a nadie. Ojalá no hubiese salido de casa. Ojalá me hubiese quedado con ellos—dijo Khalil señalando las

ruinas de su hogar—. Ahí está mi futuro. Ahí está mi vida. Ahí está mi familia. ¿Ahora qué? ¿Qué puede existir después de esto?".

Esa noche del jueves, cuando supuestamente habría un alto al fuego, los bombardeos de los drones israelíes mataron a 98 personas.

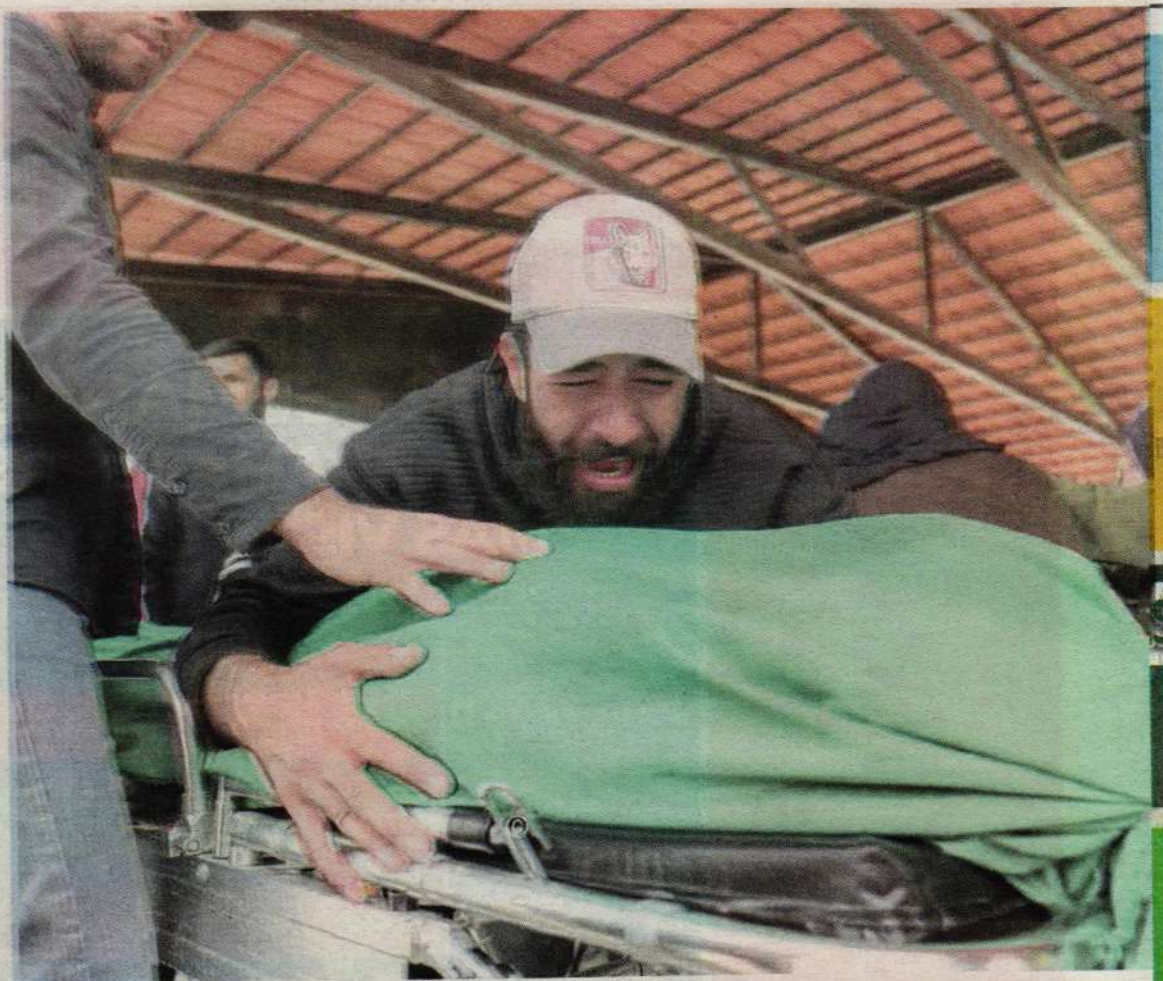
Desde el 2 de marzo pasado el ejército sionista ha matado a 2,295 civiles libaneses. Las cifras oficiales de Naciones Unidas reportan 172 menores muertos en mes y medio. "Es como si cada día todos los escolares de un aula fueran asesinados o heridos", denunció el director de UNICEF, Ted Chaiban, el martes 17 de marzo. Uno de cada cinco libaneses ha sido desplazado forzosamente de su hogar.

Los ataques contra civiles, periodistas, médicos y rescatistas no se detienen. Pueblos enteros están siendo borrados del mapa. El territorio al sur del río Litani, entre 10 y 14 kilómetros de largo, está ocupado por las tropas de Netanyahu.

El periodista y analista político israelí Ori Goldberg asegura que se trata de una limpieza étnica. "El ejército quiere el territorio del sur del Líbano sin libaneses", dice Goldberg a esta publicación. "Simplemente es mentira que el objetivo de Israel sea desarmar a Hezbolá", señala.

El pasado miércoles 8 de abril, cuando Irán y Estados Unidos pactaron el cese al fuego, el acuerdo incluía también Líbano. Esa fue una de las demandas del régimen de los ayatolás para volver a la mesa de negociaciones. Los mediadores pakistaníes anunciaron que Trump sabía que se trataba de una condición de Teherán. La respuesta de Israel fue mortífera.

Funeral de cuatro habitantes de Ain Baal, pueblo en el sur de Líbano, asesinados en un bombardeo israelí el pasado 4 de abril. (FOTO: Ahmad Hariri/@ahmd.hariri)



Escombros de la mezquita de Jebchit, bombardeada por Israel a mediados de mes. (FOTO: Hassan Ammar/AP)

Al día siguiente Netanyahu dispuso el bombardeo de todo Líbano. En 10 minutos mataron a más de 300 personas.

"Estaba en el hospital universitario Rafik Hariri cuando comenzó el bombardeo", dijo para el portal web de Médicos sin Fronteras Safa Bleik, coordinadora y médica adjunta de la organización internacional en Beirut.

"De repente, humo y polvo envolvieron el hospital. Durante varios minutos cundió

el pánico y la confusión. Entonces comenzaron a llegar las ambulancias. Y no pararon", describió.

"La sala de urgencias se llenó de familias. Padres heridos que clamaban por sus hijos. Gente que buscaba desesperada a sus seres queridos—escribió la Dra. Bleik— (...). Nunca me olvidaré de un joven que había perdido ambas piernas y tenía un pedazo de metralla en el abdomen. Aún puedo escuchar los gritos de su hermano

mientras lo veía morir".

"Los cuerpos llegaron desfigurados, en pedazos. La fuerza de las explosiones convirtió a la gente en fragmentos, una suerte de puzzle de cuerpos que aún seguimos armando", denunció Hisham Fawwaz, director del hospital de la capital.

La familia Saeed, de la aldea sureña de Srafa, se había reunido en el cementerio después de escuchar la noticia del pacto entre Irán y Estados Unidos.



Funeral de Taleen Saeed, de 1 año, asesinada el pasado 8 de abril. (FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters)



Aline Saeed, de 7 años, rezaba en la tumba de su padre cuando fue bombardeada junto a su familia en el cementerio de su pueblo, Srafa. Sobrevivió malherida. (FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters)

Algunos días antes, en un bombardeo, su casa había quedado reducida a cenizas y varios miembros del clan habían fallecido. Aline Saeed, de 7 años, rezaba en la tumba de su padre cuando volvieron a ser bombardeados. Esta vez, Aline vio morir a su hermana Taleen, de 1 año.

"Se suponía que era un alto al fuego, por eso fuimos al cementerio a rezar", contó el abuelo, Nasser Saeed, a Reuters. "No hay humani-

dad, sólo crímenes. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? ¿Acaso no somos personas? ¿No somos seres humanos? Mi nieta nació en la guerra y murió en la guerra", se lamenta el anciano.

Tras la masacre la Casa Blanca intentó encubrir a su socio israelí. El vicepresidente J. D. Vance dio una conferencia de prensa alegando que se trataba de un "malentendido legítimo". "Creo que los iraníes pensaron que el

cese al fuego incluía a Líbano cuando simplemente ese no era el caso", dijo a la prensa. "Sería bien estúpido si Irán deja que las negociaciones se desmoronen por esto", añadió.

Irán y Pakistán desmintieron a Vance. Según la CBS, "diversas fuentes diplomáticas estadounidenses" confirmaron que las negociaciones con Irán sí incluían un cese del fuego en el Líbano.

Los días que siguieron Is-

rael continuó matando en el Líbano.

El martes 14 Bezalel Smotrich inauguró un nuevo asentamiento ilegal en Cisjordania. Durante el evento anunció que Israel está por expandir sus fronteras. "Habrá una maniobra política para expandir nuestra frontera en Gaza, otra para expandir nuestra frontera en el Líbano hasta el río Litani y una tercera para expandirla en Siria, más allá de la montaña Beit She'an", dijo

Smotrich. Las declaraciones fueron transmitidas por Canal 14 de Israel.

La mañana del miércoles 15 las tropas israelíes bombardearon la aldea de Mayfadoun. Cuando la primera ambulancia se acercó a rescatar a los heridos, el ejército abrió fuego contra los paramédicos. Y cuando llegó la segunda ambulancia a rescatar a sus compañeros, los volvieron a bombardear.

Mohammed Jaber, de 43 años, llegó a la escena en una tercera ambulancia. "Creí que iba a vomitar. No podía creer lo que estaba viendo", contó Jaber a *The Associated Press*.

Seis de sus colegas yacían moribundos en el suelo. Otro, sentado en lo que quedaba de la primera ambulancia, sangraba mientras le pedía a un compañero herido que no muriese. Jaber narró que, al acercarse, volvieron a ser bombardeados por tercera vez.

Ese día Israel mató a cuatro paramédicos.

Al día siguiente bombardearon el último policlínico que quedaba en funcionamiento en el sur de Líbano, el Hospital Gubernamental de Tibnin. En total, desde marzo, van más de 91 profesionales de salud libaneses asesinados mientras trabajaban.

El jueves 16 la Casa Blanca anunció el "cese al fuego" entre Israel y Líbano. Pero el pacto nació condenado al fracaso. "La exclusión de Hezbolá en estas negociaciones revela lo poco serias que son", denuncia la periodista libanesa Lylla Younes.

"Dicen estar negociando sobre el desarme de Hezbolá, pero ni el gobierno libanés ni Israel pueden desarmarlos. ¿Qué se supone que van a conseguir con estas negociaciones, aparte de dejar que Netanyahu gane tiempo para aumentar sus agresiones? Hasta la prensa israelí tiene eso claro", dijo Younes la semana pasada en una entrevista concedida al medio estadounidense *Democracy Now*.

"Vamos a volver a nuestros pueblos, pero no nos espera más que escombros —explicó Younes— (...). Y no se trata sólo de estructuras. Es nuestra historia. Nuestros abuelos y bisabuelos construyeron esas casas. Eran sagradas para nosotros. Como en Gaza, están arrasando con universidades,

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

En la última semana el fujimorismo ha tocado tam-

A photograph of a man in a white shirt holding a mobile phone, with a woman in a white shirt and a man in a blue shirt in the background.

La metamorfosis

Revistas.PeruRadio.net.pe



Luis Carranza: replicando las elecciones del 2021, Keiko Fujimori lo quiere reclutar para la segunda vuelta de este año.

Siles, por ejemplo. Por eso hemos encargado el estudio para conocer a sus electores, creemos que ahí hay gente de derecha. Ocurre lo mismo con Belmont", dice el informante naranja.

Keiko Fujimori interpretará el papel de "tecnócrata" para la segunda vuelta y ha comenzado a recolectar cuadros que la ayuden a vender esa idea. Los encargados de armar el equipo son Marco Vinelli Ruiz, director de la Escuela de Gobierno de ESAN y coordinador del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, e Isaura Delgado, amiga personal y consejera política de Fujimori.

Quiere sumar otra vez a su equipo al exministro de Economía Luis Carranza y está buscando a un especialista joven en temas de seguridad. Fabián Novak, Ismael Benavides, Fernán Altuve, Sandro Stapleton, Pablo Bustamante, Paul Neira y Úrsula Letona son algunos de los "técnicos" que Fuerza Popular tiene en su lista. Todos en algún momento han sido profesores de la llamada "Escuela Naranja".

La palabra "orden" será la idea fuerza: "orden ciudadano" para hablar de inseguridad, "orden económico" para referirse a la economía y "orden jurídico" para hacer propuestas de la administración pública y del aparato del Estado.

Roberto Sánchez hasta ahora solo ha logrado sumar el apoyo de Perú Federal, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y la alianza Venceremos.

El problema del candidato de Juntos por el Perú para conseguir adhesiones tiene nombre y apellido: Antauro Humala Tasso. Así lo reconoció Roy Mendoza, consejero legal de Sánchez. "Se ha conversado para que baje la intensidad", dice sobre el autor del Andahuaylazo.

El último fin de semana Marisol Pérez Tello y Alfonso López Chau se reunieron en una casa de Chacarilla para evaluar a quién iban a respaldar en la segunda vuelta. Ambos concordaron que Fujimori no será una opción. Pero un apoyo público a Sánchez debía estar condicionado al retiro de Humala de la campaña y la moderación del discurso.

Enviaron el mensaje a Sánchez en la tarde del lunes, pero hasta el cierre de esta edición no tuvieron respuesta. Entre Pérez Tello y López Chau sacaron juntos 10,7%. Para el candidato de JP, sin embargo, la prioridad hoy parece ser sumar cuadros castillistas. El más reciente jale es Luis Mendieta, exjefe del Gabinete de Asesores de Pedro Castillo, quien será el nuevo coordinador de la campaña.

El equipo de Roberto Sánchez está buscando una reunión con Ricardo Belmont, pero el empresario televisivo los deja en visto. Belmont está concentrado en hacer videos en TikTok y nadar en el mar de Chorrillos.

"Todos dicen que la vez es una enfermedad, pero es la única enfermedad que queremos que dure. Pero eso es falso. Yo no quisiera que así ocurra. El día que esté arrastrando los pies, quiero que Dios me recoja", dijo Belmont en su última "pastilla" tiktokera.

A nivel de cuadros técnicos, Sánchez quiere nutrirse del equipo de Venceremos, pero no todos están de acuerdo en sumarse públicamente. La razón es la mala experiencia que tuvieron en el 2021 con Pedro Castillo.

En Renovación Popular no están pensando en hacer alianzas o ajustes de campaña. Salvo las dos reuniones para limar asperezas con el fujimorismo y una cita breve que tuvo Rafael López Aliaga con Carlos Álvarez, todos están concentrados en la revisión de las actas electorales y concretar el sorpasso a Sánchez.

En el porkysmo han contratado los servicios de una consultora argentina y otra peruana para que hagan informes sobre las irregularidades en las elecciones y el conteo de votos.

El estudio de los argentinos dice que todavía López Aliaga puede superar a Sánchez porque aún hay 1,3 millones de votos no contabilizados. El informe de la consultora peruana Prime Institute dice que "Porky" es quien quedó en el segundo lugar con 180 mil votos más que el candidato de JP y que hubo "dos capas del fraude": supresión de los votos y manipulación de los datos.



Marco Vinelli: nuevo jefe del plan de gobierno del fujimorismo y encargado de recolectar a los técnicos que se sumarán a la campaña.

nombre del partido".

Pese a que Galarreta es amigo personal de Richard Acuña, Fujimori le ha ordenado no conversar aún con APP. César Acuña apenas sacó 1,1% y para la hija del dictador puede ser un lastre. Donde sí quiere pescar votos es en el bolsón electoral de Jorge Nieto, quien conquistó a más de un millón y medio de electores.

Fujimori ha encargado un estudio para saber el perfil del elector de Nieto y qué tanto estarían dispuestos a votar por ella. Algo similar hará con el 10% del electorado que marcó por Ricardo Belmont.

Por ahora no ha contactado a ninguno de los dos excandidatos.

"Sabemos que Nieto es ambiguo, dice una cosa y hace otra. Mira lo que hizo con las elecciones complementarias. Él las impulsó y luego se bajó del coche. También somos conscientes de que tiene un núcleo muy caviar y antifujimorista: Favio Figallo y Abraham

ALONSO ZAMBRANO

El mensaje del fax era tan breve como explícito. "Dr. Huerta, mucho agradeceremos nos remita el apoyo mensual que el día de ayer nos correspondía recibir respecto del presente mes. Atentamente, Flor de María y Julia". Las firmantes eran dos fiscales reclamando sus coimas. El pagador era Vladimiro Montesinos. Y los servicios por los que cobraban consistían en abrir investigaciones a los "enemigos" del régimen y limpiar a los amigos. Tras 23 años prófuga, Flor de María Maita Luna acaba de ser condenada a siete años de cárcel. Aquel fax del 16 de noviembre de 1999 que envió al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) resultó una prueba determinante.

Dos décadas después de la caída del fujimontesinismo la justicia aún sigue cobrando cuentas pendientes. El pasado jueves 16 de abril saldó una de ellas. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó, finalmente, a Maita Luna. La exfiscal había sido capturada el 9 de septiembre del año pasado.

Flor Maita (70) nació en 1955 en Jauja, Junín. En 1991 ingresó al Ministerio Público como fiscal provincial titular en Lima. Era, en apariencia, una funcionaria común y corriente, sin nada que destacar de su carrera.

En 1992 su vida laboral tomó otro rumbo. Según las pesquisas del Ministerio Público, fue captada por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El expediente señala también que el enlace entre la fiscal y el socio de Alberto Fujimori fue un hermano de Maita que era agente del SIN.

"Cuando se produjo el golpe de Estado de Fujimori, a ella la ascendieron. Incluso llegó a ser fiscal superior. Lo que hicieron fue crear una sala especial con fiscales y magistrados al servicio del SIN, dedicados a investigar y juzgar delitos tributarios y aduaneros. Limpiaban a sus amigos y encausaban a sus enemigos", recuerda el exfiscal Víctor Cubas.

JUSTICIATV



La exfiscal montesinista Flor Maita Luna en audiencia judicial. De cumplir toda su condena en la cárcel, saldrá del penal de mujeres de Chorrillos en el 2032.

Flor de fiscal

► La doctora Maita Luna cobraba al SIN un sueldo paralelo dispuesto por Vladimiro Montesinos. Estuvo 23 años como prófuga y el 16 de abril pasado la condenaron por fin

Uno de los casos más emblemáticos de utilización del aparato de justicia para atacar a los "críticos" con el régimen fue el del empresario Baruch Ivcher, entonces dueño del Canal 2. "En un principio fue aliado del régimen y tuvo muy buenas relaciones, pero luego se pelearon y lo encausaron", cuenta Cubas.

Todo ese engranaje operaba con la aprobación de Blanca Nélida Colán, entonces Fiscal de la Nación. "Ella era la que internamente emitía las resoluciones para facilitar el trabajo de ese grupo. Todo se hacía con su anuencia", agrega Cubas.

Maita era un peón de confianza de ese sistema. Según el expediente, se trasladaba de un lado a otro de la ciudad en vehículos oficiales del SIN. Formaba parte del grupo de magistrados a los que Montesinos tenía

en nómina. Los sobres con dinero los preparaba María Angélica Arce Guerrero, secretaria de Montesinos. Y de entregarle el efectivo a María Angélica Arce se encargaba Matilde Pinchi Pinchi, también secretaria de Montesinos.

"En el caso de Flor Maita, específicamente, recuerdo que eran pagos de 2,500 soles", declaró Pinchi Pinchi como testigo durante el juicio. El chofer de Montesinos, Luis Clemente Malca Guizado, también confirmó la entrega de los sobres en el domicilio de la exfiscal. "Yo le decía: 'vengo de parte del doctor' y ella lo recibía sin mayor conversación", contó.

"Ella tenía el encargo específico de atacar a funcionarios o personas opositoras al régimen y proteger a allegados del gobierno de Fujimori y Montesinos", resume el exprocurador Julio

Arbizu, quien integró la Procuraduría Anticorrupción entre 2000 y 2004.

Entre 1997 y 2000 Maita ocupó el cargo de fiscal superior especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, junto a la exfiscal Julia Eguía Dávalos. Desde ese cargo, según Arbizu, su función consistía "en detener todas las investigaciones que se abrieron contra sujetos allegados al régimen en temas de tráfico ilícito de drogas. Si una investigación llegaba en segunda instancia a su fiscalía, ella era la encargada de archivarla u ordenar que se siguiera investigando. Tenía un poder amplísimo", dice Arbizu.

Entre los casos que pasaron por su despacho estuvo el de Luis León Obando, detenido en 1996 con 120 kilos de pasta básica de cocaína y liberado en el 2001.

Fue una excolega de Flor

Maita quien narró los detalles de una de las jornadas más oscuras del régimen fujimontesinista.

El 15 de septiembre del 2000, un día después de que estallara el escándalo de los vladivideos, Sonia Rodríguez Flores, una de las fiscales asignadas al caso Kouri-Montesinos, fue convocada de urgencia al SIN por sus superiores. Allí se encontró un operativo montado para sabotear las investigaciones contra la red.

"Al llegar fui recibida por un militar y pude identificar diversas personas en el interior de las instalaciones. El señor Pedro Huerta Caballero, jefe de asesoría jurídica del SIN, Vladimiro Montesinos, el juez Rodríguez Medrano, un juez que se apellidaba Trujillo y observé que diversas personas, incluida Maita Luna, estaban digitando y elaborando resoluciones judiciales y manifestaciones del caso Kouri-Montesinos. El sentido de esas resoluciones era exculpar a los involucrados", declaró la testigo durante el juicio. Contó también que sus superiores la conminaron a firmar los documentos fraguados. Y así lo hizo.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

La jefa de la Junta Nacional de Justicia aprieta las tuercas de la institución para alinearse al discurso de su homólogo del Congreso, Fernando Rospigliosi. Según testimonios y documentos obtenidos por este semanario, María Teresa Cabrera ha intervenido tres oficinas claves de la entidad para controlar directamente las sanciones contra jueces y fiscales y los puntajes de las evaluaciones de desempeño. El objetivo sería deshacerse de los magistrados que se han declarado en rebeldía a las leyes pro crimen del Parlamento. La coartada para perpetrar la razia serán las evaluaciones a más de tres mil jueces que se llevarán a cabo en mayo.

“El plan también incluye colocar jueces que garanticen la impunidad de varios actores políticos. Es un *remake* de lo que ocurrió en los años 90”, advierte un magistrado con conocimiento directo de la estrategia en la JNJ.

El prólogo de esta historia fueron las reposiciones de Tomás Aladino Gálvez y las hermanas Benavides –Enma y Patricia– en sus respectivos puestos. Y mientras unos volvieron, a otros les van allanando el camino para despedirlos.

La semana pasada la presidencia de la JNJ también ordenó iniciar un nuevo proceso disciplinario contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanchu por no aplicar la nueva ley que limita la investigación de organizaciones criminales y la ley de prescripción para crímenes de lesa humanidad.

En abril de este año la gestión de Cabrera suspendió por seis meses a José Alarcón Butrón, jefe durante diez años de la oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital de la JNJ. Dicha área es clave pues ahí se almacena el archivo digital de los 1,600 procesos disciplinarios de jueces y fiscales. En ese mismo despacho también se controla el *software* que registra los puntajes asignados a los magistrados durante las evaluaciones de desempeño.

La semana pasada la presidencia de la JNJ le comunicó

La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. Tiene todo listo para aplicar una razia a gran escala en el Poder Judicial.



Simplemente Cabrera

► La orden la envió Fernando Rospigliosi, vocero de Fuerza Popular y de la mafia gobernante: barrer con los jueces “rebeldes”. La presidenta de la Junta Nacional de Justicia la ha empezado a cumplir removiendo personal clave de la institución



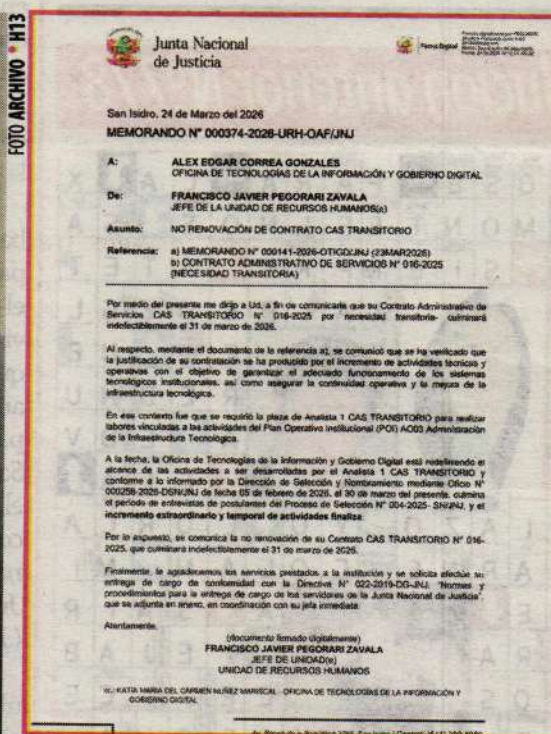
José Alarcón Butrón era el principal custodio del archivo digital de la JNJ que contiene los procesos disciplinarios y los puntajes de jueces y fiscales. Hace diez días la presidenta de la Junta lo mandó a su casa por seis meses.

a Alarcón que había sido suspendido de sus labores por seis meses. Tras su salida, Cabrera le encargó el manejo de los sistemas informáticos a Katia Núñez Mariscal, quien también es directora general de la JNJ y su principal consejera.

“Están tomando las áreas estratégicas de la Junta para sacar a los funcionarios de carrera y poner a personal que les sea leal. Quieren controlarlo todo”, señala un alto funcionario de la JNJ.

También le pusieron la

puntería a Alex Correa Gonzales, el principal administrador de la red donde se almacena la información más sensible sobre los magistrados y se custodian los accesos de seguridad a la plataforma virtual de la Junta.



La carta enviada a Alex Correa Gonzales, administrador de la red digital de la JNJ donde se custodia los documentos más sensibles de los magistrados. Ahí se le comunica a Correa que su contrato no será renovado.

El 24 de marzo pasado la JNJ le informó a Correa que su contrato no había sido renovado. Tres días después se produjo otro cambio clave en el personal. Trasladaron a Mario Vallejos, encargado de detectar incidentes y vulnerabilidades en el sistema de ciberseguridad de los archivos digitales, a la Dirección de Selección y Nombramiento, un área en la que nunca había trabajado.

Según documentos en poder de esta revista, estos trabajadores ya han sido reemplazados por personal sin experiencia previa en la institución. “Si se quiere ayudar a algún magistrado embarrado en algún caso, lo único que van a tener que hacer es esquivar algunos controles de seguridad y tendrán todo el sistema a su disposición”, señala una fuente de la JNJ.

El equipo al mando de Alarcón ya había tenido un encontronazo con la gestión de Cabrera anteriormente. A inicios de agosto del 2025 la JNJ emitió un comunicado

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

mezquitas, bibliotecas y todo nuestro patrimonio cultural. Es exactamente el mismo guion. Quieren destruir al pueblo libanés”.

Tres días después de anunciarse el pacto con el gobierno libanés, el ejército israelí hizo pública la creación de la “línea amarilla” libanesa. Igual que en Gaza, se trata de un supuesto “perímetro de defensa”, que llega hasta el río Litani y divide el territorio libanés en dos, demarcando la zona bajo ocupación israelí.

Alrededor del 10% del territorio libanés ahora está ocupado. Los libaneses no tienen permitido regresar a sus hogares.

“Todas las casas y aldeas cercanas a la frontera serán demolidas siguiendo el modelo gazatí de Rafa y Beit Hanoun”, anunció hace un mes el ministro de Defensa Israel Katz.

Una nueva investigación del periódico israelí *Haaretz*, publicada el domingo, denuncia que la “línea amarilla” del Líbano “marca la nueva frontera no oficial tomada por las tropas terrestres”.

El ejército sionista “está destruyendo de manera sistemática los pueblos en el sur de Líbano”, dice el reportaje que firma el periodista Yaniv

Kubovich. “Se está demoliendo viviendas civiles, edificios públicos y escuelas como parte de una política destinada a ‘limpiar la zona’”, revela su investigación.

En la destrucción están trabajando los mismos empresarios que arrasaron con Gaza, se explica en el informe periodístico. El ejército les paga en función al número de estructuras demolidas, con una cuota mínima diaria por excavadora. Y al mismo tiempo se está duplicando el número de bases militares ilegales construidas en el territorio ocupado.

“Israel está utilizando en Líbano las mismas tácticas que empleó contra Gaza”, nos dice el periodista israelí Ori Goldberg. “Periodistas y paramédicos son blancos de ataques, se están arrasando pueblos enteros. El objetivo, el único objetivo, es expulsar a los libaneses del sur”, señala.

Ramzi Kaiss, director del departamento de investigación en Beirut de la ONG internacional Human Rights Watch, está de acuerdo. “Esto —apunta Kaiss— no es más que el resultado de la impunidad absoluta que hubo en Gaza, donde nadie ha tenido que rendir cuentas por los crímenes cometidos”.

total del ausentismo se amplifica, aunque se mantiene por debajo de la diferencia proyectada entre Sánchez y López Aliaga.

“¿Eso cambia quién pasa a la segunda vuelta? No”, concluyó Márquez en su análisis. “La apertura tardía de las mesas no generó un efecto en el ausentismo que cambie el orden de los resultados”, añadió.

Las conclusiones de estos análisis contrastan con la posición de López Aliaga, quien ha planteado la convocatoria de elecciones complementarias en las mesas que abrieron con retraso en Lima, o incluso la nulidad del proceso.

El argumento se apoya en el nivel de ausentismo registrado en la capital. Según cifras de la ONPE, este alcanzó el 23,6% en Lima Metropolitana, por encima del 13,9% registrado en 2016. En términos absolutos, esto equivale a cerca de 1,84 millones de electores que no acudieron a votar, casi 930,000 más que hace una década.

Este aumento, sin embargo, no se explica únicamente por las demoras en la instalación de mesas, según funcionarios de la ONPE consultados por esta revista. Si bien los retrasos pudieron incidir en la participación en distritos específicos, el crecimiento del ausentismo responde también a dinámicas más amplias de comportamiento electoral en la ciudad.

Para López Aliaga, sin embargo, ese ausentismo es clave para explicar su ubicación en el conteo. Pero los análisis revisados en esta nota muestran que el impacto de las demoras, aunque real, sería insuficiente para revertir la diferencia con Sánchez. Cualquier cambio en el resultado no dependería del conteo de votos sino de alguna decisión de emergencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por lo pronto, el miércoles último el pleno del JNE decidió, por tres votos contra dos, desestimar de momento la convocatoria de elecciones complementarias en Lima, tal como lo había solicitado el candidato de Renovación Popular.

Con ese escenario, y de acuerdo con las proyecciones independientes, el conteo final mantendría a López Aliaga fuera del balotaje y a Sánchez en el segundo lugar.

El nombre de Maita y sus números de teléfono también estaban en una de las agendas incautadas en el domicilio de Montesinos tras la caída en desgracia del asesor de Fujimori.

En cuanto al fax en el que reclamaban el pago “de sus mensualidades”, el documento fue rescatado de la destrucción por Rafael Merino Bartet, asesor del SIN, quien acopió archivos antes de que Montesinos ordenara borrar toda la documentación tras la caída del régimen.

Durante el juicio, Maita reconoció haber tenido reuniones privadas con Montesinos, aunque negó haber cometido algún delito. “La primera vez que me reuní con él fue porque llamaron a mi despacho personal desde la oficina del señor Montesinos para pedirme una reunión. No tuve ningún inconveniente en ir y me entrevisté efectivamente con él. Hablamos temas puntuales como los arrepentidos en los casos de tráfico de drogas y la Unidad de Investigación de Lavado de Activos”, declaró.

Cuando el régimen cayó, Maita desapareció sin dejar rastro. Oficialmente nunca salió del país. El 9 de septiembre de 2025 la Policía la detuvo cerca del Centro Comercial La Rotonda, en La Molina. Durante la audiencia dijo que siempre estuvo en su casa.

“Yo nunca me he escondido, señor magistrado. Siempre he vivido en mi domicilio de La Molina. Durante todos estos años, al ver que no venían a buscarme ni había ninguna acción en mi contra, yo, de buena fe, asumí que mi situación legal había cambiado a una comparecencia. No es que haya evadido la justicia, es que no sentí que estuviera siendo buscada”, declaró Maita durante el juicio. La Fiscalía alegó que no fue capturada porque evadió cualquier trámite que pudiera servir para dar con su paradero. De cumplir toda la condena en la cárcel, saldrá del penal de mujeres de Chorrillos el 2032.

Para Arbizu el tiempo que tardó la justicia en alcanzarla no es un dato menor. “Eso da cuenta —dice— de lo pernicioso y el grado del daño que dejó el fujimorismo al Estado peruano hasta ahora”.

pronunciándose sobre la supuesta pérdida de un archivo digital con los procesos disciplinarios de 1,200 operadores de justicia. El comunicado fue redactado y difundido por Jesús Jáuregui Silva, jefe de comunicaciones de la Junta y hombre de la máxima confianza de María Teresa Cabrera. Todo apunta a que se trató de una jugada mediática con el fin de allanar el camino para las remociones.

Tras la publicación del comunicado, Alarcón le envió una carta a Jáuregui negando la pérdida de información.

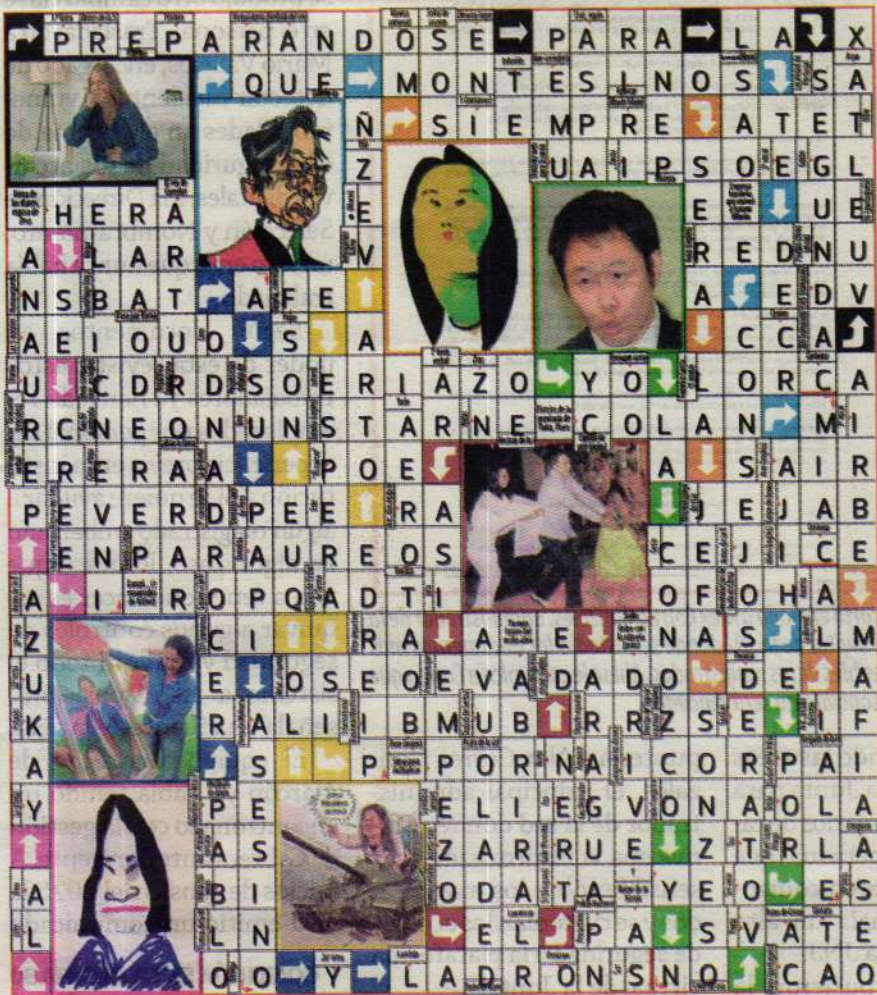
“La falta de diligencia en la verificación de los datos técnicos y el incumplimiento de los protocolos de coordinación han dañado la imagen de la institución y generado una crisis de confianza innecesaria”, subrayó Alarcón.

La gestión de Cabrera también ha ordenado cambios sustanciales en la oficina de Selección y Nombramiento de jueces y fiscales. Entre marzo y abril la actual gestión dispuso el cambio temporal de seis funcionarios de áreas donde llevaban años laborando. La orden señala que el traslado será hasta julio de este año. El método de reemplazar trabajadores también se ha aplicado al área de procedimientos disciplinarios.

La JNJ también se ha encargado de bloquear un proyecto que se estaba desarrollando de la mano con el Banco Mundial y el Ministerio de Justicia para diseñar dos nuevos *softwares* que ayuden a que los procesos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales sean más seguros y eficientes. El proyecto, con un presupuesto de S/ 18'715,457, se puso en marcha el año pasado y el objetivo era que el producto quede listo en abril de este año. La JNJ se comprometió a contratar un equipo de ocho expertos informáticos para que diseñaran los *softwares*. Al final, la institución contrató sólo a tres, por lo que el proyecto está paralizado hasta nuevo aviso.

“Mucho de lo que ha ocurrido en estos dos últimos meses como la intervención de áreas claves y el sabotaje de proyectos de gran envergadura son cuestiones que ocurren por primera vez en los años que lleva existiendo la JNJ”, señala un funcionario de dicha institución.

Pendograma solución anterior N°778





*Las columnas más
leídas están en*

HILDEBRANDT *en sus trece*

*Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata*

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



Revistas.PeruRadio.net.pe